

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

Presidencia de los señores diputados Alberto Reinaldo Pierri,
y Carlos Alberto Romero

18ª REUNION — Continuación de la 6ª SESION ORDINARIA —
JULIO 12 de 1995

Secretarios: doctores Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo,
Enrique Picado y Ariel Puebla

Prosecretarios: doctor Juan Estrada y señor Juan Carlos Stavale

DIPUTADOS PRESENTES:

ACEROLAZA, Florencio
ACHEM, Antonio
ADAIME, Felipe Teófilo
ALBAMONTE, Alberto
ALBERTI, Juan Carlos
ALCALA, Néstor Ricardo
ALGABA, Ernesto Pedro
ALSOGARAY, Alvaro Carlos
ALVAREZ, Carlos Alberto
ALVAREZ, Carlos Raúl
ALVAREZ ECHAGUE, Raúl
ALVAREZ GARCÍA, Normando M.
ANTELO, José María
ARGUELLO, Jorge Martín Arturo
ARIAS, César
ARMENDARIZ, Alejandro
ARRECHEA, José Salvador
AYALA, Susana Beatriz
AYETZ, Liliana
BALESTRA, René Heivecio
BALESTRINI, Alberto Edgardo
BALESTRINI, Miguel Alberto
BALTER, Carlos Mario
BARBERÁ, Eliseo
BARBOTTI, Atilio Ector
BARRIONUEVO, Eduardo E.
BAUM, Daniel
BENEDETTI, Jorge Enrique
BENZI, María Cristina
BERMÚDEZ, María del Pilar
BIANCHI SILVESTRE, Marcela
BORDA, Osvaldo
BRACCHI, Osvaldo Américo
BRANDA, Carlos Ernesto
BRAVO, Alfredo Pedro
BRESER, Adalberto Edgardo
BRUNELLI, Naldo Raúl A.
BULLRICH, Patricia
CAILABA, Aníbal
CAMANO, Eduardo Oscar
CAMARA, Mario Angel
CAMPERO, Rodolfo Martín
CASTILLO, José Luis
CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, Carlos José

CEBALLOS, Walter Alberto
CLOSS, Ramón Alberto
CROSTELLI, Juan Carlos
D'ALESSANDRO, Miguel
D'AMBROSIO, Ángel Mario
DAUD, Jorge Carlos
D'ELIA, Roberto Antonio
DELLEPIANE, Carlos Francisco
DÍAZ MARTÍNEZ, Jorge Raúl
DIGÓN, Roberto Secundino
DI TULIO, Héctor Horacio
DONNI, Luisa Cristina
DUMÓN, José Gabriel
DURANOVA Y VEDIA, Francisco de
DURRIEU, Marcela Margarita
ESTEVEZ BOERO, Guillermo E.
FABRISSIN, Carlos Alberto
FALLETI, Julio César José
FELGUERAS, Ricardo Ernesto
FERNÁNDEZ GILL, Guillermo
FLORES, Rafael Horacio
FRAGOSO, Francisco Ulises
FUNES, Carlos Delcio
GALANTE, Pedro Jorge
GALLO, Orlando Juan
GARAY, Nicolás Alfredo
GARCIA MORENO, Miguel Ángel
GAUNA, Juan Octavio
GAZIA, Rodolfo Mauricio
GIMÉNEZ, Déifer Abel
GIMÉNEZ, Ramón Francisco
GOLPE, Carlos Horacio
GOLPE, Néstor Lino
GÓMEZ CENTURION, Carlos E.
GONZÁLEZ, Antonio Erman
GONZÁLEZ CABANAS, Tomás W.
GONZÁLEZ GAVIOLA, Juan H.
GRANADOS, Dulce
GREEN, Gustavo Adolfo
HARDY, Aníbal Osvaldo
HERRERA ARIAS, Manuel H.
HUMADA, Raúl
IBARRIA, José María
ITURBE, César Eusebio
JUNCOSA, Rodolfo Aldo
KAEHLER, Ernesto Rolando

KAMMERATH, Germán Luis
KELLY, Elsa Diana Rosa
KESSLER, Ana Raquel
KOTH, Carlos
LAHOZ, José Fernando
LAMBERTO, Oscar Santiago
LARRABURU, Dámaso
LECONTE, Ricardo Guillermo
LEGUIZAMÓN, María Laura
LÓPEZ, Alcides Humberto
LÓPEZ, José Augusto
LOSADA, Luis Enrique
LYNCH, Carlos Alberto
MACEDO, Horacio Antonio
MACHADO, Oscar Alfredo
MAIDANA, Elsa Ignacia
MANFREDOTTI, Carlos
MAQUEDA, Juan Carlos
MARCOS, Ricardo Ernesto
MARTÍNEZ, Silvia Virginia
MARTÍNEZ GARBINO, Emilio R.
MATHOV, Enrique José
MATZKIN, Jorge Rubén
MENDOZA, Claudio Ramiro
MENDOZA, Martín
MENECHINI, Javier Reynaldo
MICELLI, Marco Aurelio
MICHITTE, Salomón Antonio
MIGLIOZZI, Julio Alberto
MIRALLES DE ROMERO, Norma
MOLINAS, Ricardo Francisco
MOREAU, Leopoldo Raúl
MORELLO, Emilio Pedro
MÜLLER, Mabel Hilda
NACUL, Miguel Camel
NATALE, Alberto Adolfo
NIEVA, Alejandro Mario
NIÑO, Jorge
NOVAU, Pedro José
OLIVERA, Enrique José
ORTIZ MALDONADO, Gastón H.
PARADA, Alberto
PASCUAL, Rafael Manuel
PELLIN, Osvaldo Francisco
PEPE, Lorenzo Antonio
PERALTA, Aníbal Pedro
PÉREZ, Jorge Telmo

PERNASETTI, Horacio F.
PERRINI, Glorinda Eulalia
PESCE, Félix
PICCININI, Ana Ida
PICHETTO, Miguel Ángel
PIERRI, Alberto Reinaldo
POLINO, Héctor Teodoro
POLO, Luis Nicolás
RE, Ricardo Horacio
RICO, Aldo
RODRIGO, Esteban Joaquín
RODRIGUEZ, Jesús
RODRIGUEZ, Mabel F.
RODRIGUEZ SARUDO, Hugo B.
ROSO, Rubén Darío
ROMERO, Carlos Alberto
ROMERO, Humberto Antonio
ROY, Irma
RUBINI, Mirta Elsa
SALENO, María Antonia
SAMPETRO, Darci
SARQUIZ, José Alberto
SCHIZI, Carlos José
SEBASTIANI, Claudio A.
SMITH, Santos
SOLANAS, Fernando E.
SORIA, Carlos Ernesto
SPINOSA, Augusto Juan
STOFANI, Federico
SUCILLA, Nereé
SULIRO, Carlos Adolfo
TERRAGNO, Rodolfo Héctor
TOCINI de VELY, Adriana
TOLOMO, Leonor
TOPIA, Miguel Ángel
TOPA, Raúl Roque
TOTO, Francisco Patricio
TROYANO, Silvia Elena
VALCARCEL, Juan Manuel
VARELA CID, Eduardo
VENENIA, Guillerberto Edgardo
VIGLIONE, Aulio Oscar
VITAR, José Alberto
ZAVALLA, José Luis

ZICARELLI, Orlando A.
ZUCCARDI, María Cristina

AUSENTES, CON LICENCIA:

FAYAD, Víctor Manuel
SANCHEZ GALDEANO, Roque

AUSENTES, CON SOLICITUD DE LICENCIA PENDIENTE DE APROBACION DE LA HONORABLE CAMARA:

ABBIAGGLE, Carlos Enrique
ARAGONÉS de JUÁREZ, Mercedes
BECHERRA, Nicolás Eduardo
CASARI de ALARCIA, Leonor
DRISALDI, María Rita
FERNÁNDEZ MEINDE, Graciela
GALVÁN, Raúl Alfredo
JAUNARENA, José Horacio
LAFALLA, Arturo Pedro
MARTINEZ, Manuel Luis
MENEM, Carlos Omar
MERCADER, Martha Evelina
MERCADO LUNA, Ricardo Gastón
NEGRI, Mario Raúl
ORCAZ, Carlos Alfredo
ORQUIN, Leopoldo Manuel
PRAT, Alfredo Ernesto
ROGGERO, Humberto Jesús
ROIG, Angel
SAADI, Ramón Eduardo
SOBOTANO, Margarita María
TENEY, Carlos
TEODOSIU, Jorge Nicolás
TRETEL MEYER, Raúl
VICCHI, Raúl Horacio

AUSENTES, CON AVISO:

ABASTO, Ángel Leonidas
ALENDE, Oscar Eduardo

ARANDA, Saturnino Dantti
BECHERRA, Carlos Armando
BERHONGARAY, Antonio Tomás
BISCHOF, Enrique Alberto
BONINO, Miguel Angel
BONOMI, Silvia Mónica
BRUZZO, Omar Abdulló
BUSSI, Antonio Domingo
CABIRÓN, Juan Carlos
CARCA, Elisa Beatriz
CERBERA, Rogelio Rafael
CORCHUELO BLASCO, José M.
DEL FABRO, Lilian
FIGUEROA, Pedro Octavio
FOLLONI, Jorge Oscar
GIOIA, José Luis
GUERRERO, Luis Serafín
GUZMAN, María Cristina
HERNÁNDEZ, Antonio María
HERREBA, Bernardo Eligio
IBARRECHE, Julio César
LOPEZ ARIAS, Marcelo E.
LLOPIS, Enrique Raúl
MARCOLLI, Juan Miguel A.
MARTINEZ, Esteban
MOLARBO, Elvio Francisco
MONTIEL, Sergio Alberto
MUNIACURRIA, Marcelo Julio
MUNOZ, Marcelo Bernardo
MURIEL, Néstor Jorge
NEDER, Jorge Humberto
PARAJÓN, José María
PAROLA, José María
PATTERSON, Ricardo Anicel
PELAEZ, Víctor
PINTO, Guillermo
RODRIGUEZ, José
RUIZ PALACIOS, José David
SANTÍN, Eduardo
SCHIARETTI, Juan
USANBIZAGA, Horacio Daniel
VARELA, Néstor Ángel
VÁZQUEZ, Roberto
VÁZQUEZ, Silvia Beatriz

-- La referencia acerca del distrito, bloque y período del mandato de cada señor diputado puede consultarse en el Diario de Sesiones correspondiente a la 1ª sesión ordinaria (anexo 4ª reunión) de fecha 8 y 9 de marzo de 1995.

SUMARIO

1. Continúa la consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se instituye la mediación obligatoria previa a todo juicio (15-S-95). Se sanciona con modificaciones. (Pág. 1887.)
2. Moción de orden formulada por el señor diputado Rodríguez (Jesús) de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento y moción de preferencia para el proyecto de ley del que es coautor por el cual se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre los adelantos en concepto de coparticipación girados por la Tesorería General de la Nación a las provincias (2.804-D-95). Se aprueban ambas proposiciones. (Pág. 1897.)
3. Moción de orden formulada por el señor diputado Matzlin de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento y moción de tratamiento sobre tablas del dictamen de las comi-

siones de Legislación General y de Legislación del Trabajo en el proyecto de ley en revisión sobre concursos y quiebras (1-S-95). Se aprueban ambas proposiciones. (Pág. 1898.)

4. Moción de orden formulada por el señor diputado Dumón de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento y moción de preferencia para el proyecto de ley del que es coautor por el cual se declara el estado de emergencia económica, financiera y bancaria en el país (2.817-D-95). Se aprueban ambas proposiciones. (Página 1899.)
5. Moción de orden formulada por el señor diputado Pascual de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración del que es coautor por el que se solicita al Poder Ejecutivo el cumplimiento del decreto 928/95 por el que se convoca a elecciones de intendente de la ciudad de Buenos Aires y de un senador nacional, para el día 8 de octubre de 1995 (2.842-D-95). Es rechazada. (Pág. 1901.)

6. Moción de orden formulada por el señor diputado Armendáriz de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de solicitar el tratamiento del proyecto de ley del que es coautor por el que se deroga el artículo 35 de la ley 24.447, de presupuesto general de la Nación, por el cual se dispone que estarán a cargo del PAMI los subsidios por pobreza y por sepelio (885-D-95). Es rechazada. (Pág. 1902.)
7. Moción de orden formulada por el señor diputado Armendáriz de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de solicitar el tratamiento del proyecto de resolución del que es coautor por el que se promueve juicio político al señor ministro de Salud y Acción Social de la Nación, doctor Alberto Mazza (2.244-D-94). Es rechazada. (Pág. 1903.)
8. Moción de orden formulada por el señor diputado Novati de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de solicitar preferencia para el proyecto de declaración de su autoría por el que se pide al Poder Ejecutivo que declare la emergencia ocupacional en todo el territorio nacional (2.816-D-95). Es rechazada. (Pág. 1903.)
9. Moción de orden formulada por el señor diputado Rico de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de solicitar preferencia para el proyecto de ley del que es coautor sobre régimen de emergencia para el pago de salarios y contribuciones (2.454-D-95). Es rechazada. (Pág. 1904.)
10. Consideración del dictamen de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Justicia en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre instancia obligatoria de conciliación laboral, previa a la instancia judicial (84-P.35-91). Se pasa a cuarto intermedio. (Pág. 1904.)
11. Apéndice:
 - A. Sanciones de la Honorable Cámara. (Pág. 1944.)
 - B. Inserción solicitada por el señor diputado Trettel Meyer. (Pág. 1948.)

—En Buenos Aires, a los doce días del mes de julio de 1995, a la hora 17 y 20:

1

MEDIACIÓN PREVIA A TODO JUICIO (Continuación)

Sr. Presidente (Pierri).— Continúa la sesión. Prosigue la consideración en particular del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia en el proyecto de ley en

revisión por el cual se instituye la mediación obligatoria previa a todo juicio (expediente 15-S.-95).¹

Al pasar a cuarto intermedio el miércoles pasado, la Cámara estaba abocada al tratamiento del capítulo titulado "Del Registro de Mediadores", que comprende los artículos 15 a 17.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. D. rañona y Vedia. — Señor presidente: la reunión anterior concluyó con la respuesta que dio la comisión ante las sugerencias de varios señores diputados que proponían modificaciones al artículo 16. En tal sentido se dieron los fundamentos por los cuales la comisión mantenía el texto del dictamen, es decir, la redacción recibida del Honorable Senado.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Arias. — Señor presidente: deseo informar a la Honorable Cámara que durante el día de hoy mantuvimos reuniones con integrantes de los distintos bloques en la búsqueda de un texto consensuado. Dado que no ha sido posible lograrlo, reiteramos que la comisión mantiene el texto original venido en revisión.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: en vista de la explicación dada por la comisión acerca de los esfuerzos llevados a cabo —y que siguen teniendo lugar— para arribar a un proyecto consensuado sobre el tema que nos ocupa, e interpretando el interés compartido de avanzar en ese sentido, en nombre del bloque Justicialista solicito que antes de la votación de este capítulo se pase a un breve cuarto intermedio en las bancas para hacer algunas consultas sobre esta cuestión con el ánimo de llegar a un acuerdo.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Rico. — Señor presidente: en la última reunión, la comisión, luego de agotada la discusión, no aceptó las modificaciones propuestas.

Quiero recordar que el artículo 147 del reglamento determina que cuando la comisión no acepta una determinada modificación, primero deberá votarse su propuesta. En caso de que ella no sea aceptada, se deberán continuar votando sucesivamente las otras propuestas que se presenten por escrito.

¹ Véase el texto del dictamen en el Diario de Sesiones del 5 de julio de 1995, página 1780.

distintas regiones de la República conocemos las circunstancias y la problemática de cada una de ellas. Todos los días estamos sufriendo la desocupación constante como una sangría permanente.

Hoy me atrevo a presentar este tema aquí porque formo parte de una región que ha sido muy golpeada. Soy de San Nicolás, de la zona industrial de la ribera del Paraná que va desde San Lorenzo hasta la ciudad de Campana. Allí todos los días expulsan a aproximadamente doscientos trabajadores del mercado laboral. Mañana en nuestra ciudad habrá una movilización de tipo regional y de características trascendentes dada la magnitud de la convocatoria, donde quienes transitarán y recorrerán esas calles protestando por esta política económica y reclamando por la defensa de sus empleos pondrán de manifiesto su estado de ánimo, bronca e impotencia.

Por las razones expuestas, desde el Congreso de la Nación debe enviarse un mensaje a todos quienes están haciendo reclamos en cada una de las provincias, en las que ya se ha producido un vaciamiento a raíz de la caída de las economías regionales.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, doctor Carlos Alberto Romero.

Sr. Novau.— Los estados provinciales prácticamente han quedado sin oxígeno porque el poder central les llevó sus fondos y no les dio más respuestas. Existen muchos sectores en estado de quebranto por una situación económica, una política y un modelo —el de la convertibilidad— que ya no brinda respuesta pues se agotó en la primera instancia —la estabilidad— y no generó la producción y el trabajo, que son los factores que pueden salvar esta coyuntura tan difícil.

Por lo expuesto, mociono para que la Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento para pedir preferencia para la próxima sesión respecto de un proyecto de declaración por el que se solicita al Poder Ejecutivo que declare la emergencia ocupacional en todo el territorio nacional. De ese modo se podría poner en marcha todo lo relativo a la promoción del empleo, los incentivos, las moratorias y demás medidas económicas de fondo tendientes a terminar con este grave flagelo que hoy estamos padeciendo todos los argentinos.

Sr. Presidente (Romero, C. A.).— Se va a votar la moción de apartamiento de las prescripciones del reglamento formulada por el señor di-

putado por Buenos Aires. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.

—Resulta negativa.

Sr. Presidente (Romero, C. A.).— Queda rechazada la moción.

9

MOCION DE ORDEN

Sr. Presidente (Romero, C. A.).— Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Rico.— Señor presidente: parece que estamos en la hora de las emergencias en lugar de la de las preferencias.

Formulo moción de apartamiento de las prescripciones del reglamento para pedir preferencia, con despacho de comisión, respecto del proyecto de ley contenido en el expediente 2.454-D-95, presentado por los integrantes del bloque del MODIN el 23 de junio de 1995. Esta iniciativa propone que se declare una emergencia para los que deben pagar salarios y contribuciones, así como para los jubilados o los trabajadores que no cobran en tiempo, a fin de que puedan diferir el pago de sus impuestos y los servicios públicos que prestan las empresas que han sido privatizadas. Esta propuesta es al solo efecto de restablecer el principio de equidad y justicia. Si hay alguien que por culpa de decisiones que emanan del Poder Ejecutivo no puede cobrar sus haberes en tiempo, el mismo Poder Ejecutivo le debe dar la oportunidad de que solucione sus problemas.

Sr. Presidente (Romero, C. A.).— Se va a votar la moción de apartamiento del reglamento formulada por el señor diputado por Buenos Aires. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.

—Resulta negativa.

Sr. Presidente (Romero, C. A.).— Queda rechazada la moción.

10

INSTANCIA OBLIGATORIA DE CONCILIACION LABORAL

(Orden del Día Nº 1.469)

Dictamen de las comisiones en minoría *

Honorable Cámara:

Las comisiones de Legislación del Trabajo y de Justicia han considerado el mensaje 67 y proyecto de ley,

* Artículo 90, segundo párrafo, del Reglamento de la Honorable Cámara.

del Poder Ejecutivo mediante el cual se crea una instancia obligatoria de conciliación laboral, previa a la instancia judicial. Modificaciones a la ley 18.345, de Procedimiento Laboral; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

LEY DE INSTANCIA OBLIGATORIA DE CONCILIACION LABORAL

TITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º.—Los reclamos individuales y plurindividuales que versen sobre conflictos de derecho de la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, serán dirimidos con carácter obligatorio y previo a la demanda judicial, ante el organismo administrativo creado por el artículo 4º de esta ley, el que dependerá del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Art. 2º.—El procedimiento será gratuito para el trabajador y sus derechohabientes.

Art. 3º.—Los acuerdos alcanzados en la instancia de conciliación, así como las sumas abonadas como consecuencia de los mismos, estarán exentos de impuestos y de aportes de los trabajadores y contribuciones de los empleadores con destino al régimen de la seguridad social.

TITULO II

Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria y Registro Nacional de Conciliadores Laborales

Art. 4º.—Créase el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el que tendrá a su cargo la sustanciación del procedimiento instaurado por esta ley.

Art. 5º.—Créase el Registro Nacional de Conciliadores Laborales dependientes del Ministerio de Justicia, el que será responsable de su constitución, calificación, coordinación, depuración, actualización y gobierno.

Art. 6º.—Para ser conciliador se requerirá poseer título de abogado y cumplir con las restantes exigencias que se establezcan reglamentariamente. Asimismo, podrán requerirse condiciones especiales de antigüedad en la matrícula y calificaciones diferenciadas según el monto y complejidad del asunto.

TITULO III

Demanda de conciliación

Art. 7º.—El reclamante por sí, o a través de apoderado o representante judicial, formalizará el reclamo ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, consignando sintéticamente su petición en el formulario que reglamentariamente se apruebe.

Esta presentación suspenderá el curso de la prescripción hasta la finalización del procedimiento de conciliación.

TITULO IV

Designación del conciliador

Art. 8º.—El Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria designará por sorteo de entre los inscritos en el Registro Nacional, un conciliador que entenderá en el reclamo interpuesto.

Art. 9º.—El conciliador deberá —bajo pena de inhabilitación— excusarse de intervenir en el caso cuando concurran las causales previstas para los jueces en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Art. 10.—Las partes podrán recusar con causa al conciliador, en los casos previstos por el citado código. Si el conciliador rechazara la recusación, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social resolverá sobre su procedencia.

Art. 11.—El conciliador no podrá representar, patrocinar o asesorar a quienes fueron partes en actuaciones en las que hubiere intervenido como tal, sino luego de dos años a partir de la fecha de su cese en el Registro Nacional de Conciliadores Laborales.

TITULO V

Retribución del conciliador

Art. 12.—El conciliador percibirá por su gestión en cada conflicto en que deba intervenir, cualquiera que sea el monto en discusión e independientemente de él, un honorario básico que determinará el Ministerio de Justicia.

Este honorario se incrementará en la proporción que fije la reglamentación cuando el trámite culmine en un acuerdo conciliatorio homologado o en un laudo dictado en el caso en que las partes defirieron al conciliador la calidad de árbitro.

Art. 13.—En los supuestos previstos en el artículo anterior el pago de los honorarios al conciliador estará a cargo del empleador y deberá efectivizarse dentro de los cinco (5) días corridos de notificada la homologación del acuerdo, o en su caso, dentro de los tres (3) días corridos de consentido o ejecutoriado el laudo.

El fondo de financiamiento del presente régimen tomará a su cargo el pago al conciliador del honorario básico a que se refiere el primer párrafo del artículo 12 cuando el trámite culmine sin acuerdo conciliatorio ni designación de conciliador como árbitro.

La eventual condena en costas pronunciada en sede judicial impondrá al empleador al reintegro al fondo, del honorario básico abonado al conciliador. En el caso de condena del empleador, la respectiva sentencia podrá imponer un recargo de ese honorario dentro de los márgenes que fije la reglamentación cuando meritase en aquél un comportamiento abusivo que condujo a la frustración del trámite conciliatorio previsto en esta ley.

TITULO VI

Fondo de financiamiento

Art. 14.—Créase un fondo de financiamiento a los fines de solventar el pago de los honorarios básicos de-

bidos a los conciliadores en el caso del segundo párrafo del artículo anterior y gastos administrativos del representante.

Dicho fondo estará integrado con los siguientes recursos:

- a) Los honorarios y recargos a que hace referencia el último párrafo del artículo anterior;
- b) Los depósitos que realicen el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social;
- c) Las donaciones, legados y toda otra disposición a título gratuito en beneficio del servicio;
- d) El monto de las multas a que hace referencia el artículo 19;
- e) Las sumas asignadas en las partidas del presupuesto nacional;
- f) Toda otra suma que en el futuro se destine al presente fondo.

Art. 15. — La administración del fondo de financiamiento estará a cargo del Ministerio de Justicia, instrumentándose la misma por vía de la reglamentación pertinente.

TÍTULO VII

Procedimiento de conciliación

Art. 16. — El Servicio de Conciliación notificará al conciliador designado para el caso, adjuntándole el formulario previsto en el artículo 7º, y citará a las partes a una audiencia que deberá celebrarse ante el conciliador dentro de los diez (10) días siguientes a la designación de éste. De lo actuado se labrará acta circunstanciada.

Art. 17. — Las partes deberán ser asistidas por un letrado, o —en el caso de los trabajadores— por la asociación sindical de la actividad con personería gremial, o —en el caso de los empleadores— por sus organizaciones representativas.

Los letrados están facultados a celebrar con sus patrocinados un pacto de cuota lites que no exceda del 10 por ciento de la suma conciliada.

Art. 18. — El conciliador dispondrá de un plazo de treinta (30) días corridos —contados desde la celebración de la audiencia— para cumplir su cometido. Las partes, de común acuerdo, podrán proponer una prórroga de treinta (30) días, que el conciliador concederá si estima que la misma es conducente a la solución del conflicto. Tanto la concesión como la denegatoria de la prórroga serán irrecurribles.

Vencido el plazo sin que se hubiere arribado a una solución del conflicto, se labrará acta y quedará expedita la vía judicial ordinaria.

Art. 19. — Dentro del plazo anterior, el conciliador podrá convocar a las partes a las audiencias que entienda oportunas. Las incomparecencias injustificadas serán sancionadas con una multa equivalente al cincuenta por ciento (50 %) del valor del arancel que perciba el conciliador por su gestión.

Con la certificación del conciliador, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social promoverá la ejecución de la multa de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la ley 18.695.

Art. 20. — En forma supletoria y en la medida en que resulten compatibles, al procedimiento de conciliación regulado por la presente ley le serán aplicables la Ley General de Mediación y Conciliación, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la ley 18.345.

TÍTULO VIII

Acuerdos conciliatorios

Art. 21. — El acuerdo conciliatorio se instrumentará en un acta especial firmada por el conciliador y por las partes, sus asistentes y sus representantes, si hubieren intervenido y se hallaren presentes.

Los términos del acuerdo deberán expresarse claramente en el acta especial.

Art. 22. — El acuerdo se someterá a la homologación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el que la otorgará cuando entienda que el mismo implica una justa composición del derecho y de los intereses de las partes conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Art. 23. — El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emitirá resolución fundada homologando o rechazando el acuerdo conciliatorio, dentro del plazo de tres (3) días contados a partir de su elevación.

Art. 24. — El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá formular observaciones al acuerdo, devolviendo las actuaciones al conciliador para que —en un plazo no mayor de diez (10) días— intente lograr un nuevo acuerdo que contenga las observaciones señaladas.

Art. 25. — En el supuesto que se deniegue la homologación, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dará al interesado una certificación de tal circunstancia a los efectos del artículo 65, inciso 8º de la ley 18.345, quedando así expedita a las partes la vía judicial ordinaria.

Art. 26. — En caso de incumplimiento del acuerdo conciliatorio homologado, éste será ejecutable ante los juzgados nacionales de primera instancia del Trabajo por el procedimiento de ejecución de sentencia de los artículos 132 a 136 de la ley 18.345.

Art. 27. — Cada acuerdo conciliatorio se comunicará —con fines estadísticos— al Ministerio de Justicia.

TÍTULO IX

Arbitraje voluntario

Art. 28. — Si fracasare la instancia de conciliación, el conciliador podrá proponer a las partes que sometan voluntariamente sus discrepancias a un arbitraje, suscribiendo el respectivo compromiso arbitral.

Art. 29. — Aceptado el ofrecimiento, el compromiso deberá contener:

- a) Nombre del o de los árbitros;
- b) Puntos sujetos a arbitraje;

- c) Medios de prueba y plazos de ofrecimiento y producción;
- d) Plazo para el dictado del laudo;
- e) Los honorarios del árbitro y la forma de pago.

Art. 30. — El árbitro podrá recabar información y pruebas complementarias de las partes.

Art. 31. — El laudo será recurrente, dentro del quinto día de notificado, ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Los laudos consentidos serán ejecutables ante los juzgados nacionales de primera instancia del Trabajo.

Art. 32. — A los fines de determinar el procedimiento arbitral, plazos y demás circunstancias procesales no previstas expresamente en la presente ley, se aplicarán los principios y la normativa establecidos en los artículos 736 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

TITULO X

Modificaciones a la ley 18.345

Art. 33. — Sustitúyese el primer párrafo del artículo 35 de la ley 18.345 por el siguiente:

Artículo 35: Las partes podrán actuar personalmente o representadas de acuerdo con las disposiciones establecidas para la representación en juicio. El trabajador también podrá hacerse representar por la asociación profesional habilitada legalmente para hacerlo.

Art. 34. — Sustitúyese el artículo 46 de la ley 18.345 por el siguiente:

Artículo 46: El procedimiento será impulsado de oficio por los jueces, con excepción de la prueba informativa. Este impulso de oficio cesará en oportunidad de practicarse la liquidación, una vez recibidos los autos de la cámara o consentida o ejecutoriada la sentencia.

Art. 35. — Sustitúyese el artículo 48 de la ley 18.345 por el siguiente:

Artículo 35: *Notificaciones:* Las notificaciones serán personalmente o por cédula en los siguientes casos:

- a) La citación para contestar la demanda;
- b) El traslado de la reconvenición;
- c) Las citaciones para las audiencias;
- d) Las intimaciones o emplazamientos;
- e) Las sanciones disciplinarias;
- f) La sentencia definitiva, las interdecisorias que pongan fin total o parcialmente al proceso y las demás que se dicten respecto de peticio-

nes que, en resguardo del derecho de defensa, debieron sustanciarse por controversia de parte;

- f) Las regulaciones de honorarios;
- g) Las providencias que ordenan la apertura a prueba y las que dispongan de oficio su producción;
- h) La devolución de los autos, cuando tenga por efecto reanudar el curso de plazo;
- i) El traslado de los incidentes mencionados en el inciso e);
- j) La vista de las peritaciones con copia;
- k) La providencia que declara la causa de puro derecho;
- l) La resolución que haga saber medidas cautelares cumplidas, su modificación o levantamiento;
- m) La resolución que desestima la respuesta a la intimación al artículo 67;
- n) La primera providencia que se dicte después de extruido el expediente del archivo;
- o) La providencia que hace saber que los autos se encuentran en secretaría para alegar;
- p) El traslado de la expresión de agravios;
- q) La denegatoria del recurso extraordinario;
- r) Cuando el juez lo considere conveniente para lo cual deberá indicar expresamente esta forma de notificación.

Todas las demás providencias quedarán notificadas por ministerio de la ley los días martes y viernes, o el siguiente hábil si alguno de ellos fuese feriado. No se considerará cumplida la notificación si el expediente no estuviera en secretaría y se hiciera constar en circunstancia en el libro de asistencia. Incurrirá en falta grave el oficial primero que no mantenga a disposición de los litigantes o profesionales el libro mencionado. Los funcionarios judiciales quedarán notificados el día de la recepción del expediente en su despacho. Deberán devolverlo dentro del día siguiente, bajo apercibimiento de las medidas disciplinarias a que hubiere lugar. En casos excepcionales el juez podrá, por auto fundado, ordenar notificación telefónica.

La notificación personal se practicará firmando el interesado en el expediente, al pie de la diligencia extendida por el oficial primero.

En oportunidad de examinar el expediente, el litigante que actúe sin representación o el profesional que interviniera en el proceso como apoderado, estará obligado a notificarse expresamente de las resoluciones mencionadas en el presente artículo.

Si no lo hiciera, previo requerimiento que le formulará el oficial primero o si el interesado no supiere o no pudiere firmar, valdrá como notificación la atestación acerca de tales circunstancias y la firma de dicho empleado y la del secretario.

Art. 36. — Incorpórase como inciso 7º del artículo 65 de la ley 18.345 el siguiente:

Inciso 7º: La prueba instrumental y ofrecer todas las demás pruebas de que la actora intente valerse.

Art. 37. — Incorpórase como inciso 8º del artículo 65 de la ley 18.345 el siguiente:

Inciso 8º: Constancia de haber comparecido y agotado con carácter previo la instancia conciliadora.

Art. 38. — Sustitúyese el artículo 68 de la ley 18.345 por el siguiente:

Artículo 68: *Contestación de demanda*: Si la demanda cumpliera con los requisitos del artículo 65 o subsanados los defectos mencionados, se dará traslado de la acción a la demandada por diez (10) días. En la notificación al demandado, que se efectuará dentro de un plazo no mayor de veinte (20) días de recibido el expediente en el juzgado, se deberá indicar su obligación de contestar la demanda, ofrecer prueba y oponer las excepciones que tuviere. Si el demandado se domiciliara fuera de la ciudad de Buenos Aires, estos plazos se ampliarán en razón de un (1) día por cada cien (100) kilómetros.

Art. 39. — Sustitúyese el artículo 69 de la ley 18.345 por el siguiente:

Artículo 69: *Conciliación y transacción*. Los acuerdos conciliatorios o transaccionales celebrados por las partes con intervención del juzgado y los que ellas pacten espontáneamente, con homologación judicial posterior pasarán en autoridad de cosa juzgada.

Art. 40. — Sustitúyese el artículo 70 de la ley 18.345 por el siguiente:

Artículo 70: *Modificación de la demanda*. El actor podrá modificar la demanda antes que ésta sea notificada. Podrá asimismo, ampliar la cuantía de lo reclamado si antes de la sentencia viercen nuevos plazos o cuotas de la misma obligación. Se considerarán comunes a la ampliación los trámites que la hayan precedido y se sustanciarán únicamente con un traslado a la otra parte.

Art. 41. — Sustitúyese el artículo 71 de la ley 18.345, por el siguiente:

Artículo 71: *Contestación de la demanda*. La contestación de la demanda se formulará por escrito y se ajustará, en lo aplicable, a lo dispuesto en el artículo 65 de esta ley y en el artículo 356 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La carga prevista en el inciso 1º del artículo 356 del

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación no regirá respecto de los representantes designados en juicios universales.

Del responde y de su documentación, se dará traslado al actor quien dentro del tercer día de notificado reconocerá o desconocerá la autenticidad de la documentación, pudiendo ampliar su prueba exclusivamente con respecto a los nuevos hechos introducidos por el demandado.

Si el demandado debidamente citado no contestare la demanda en el plazo previsto en el artículo 68 será declarado rebelde, presumiéndose como ciertos los hechos expuestos en ella, salvo prueba en contrario.

En caso de discordancia entre los datos de la persona demandada y los del que contesta la demanda, el juez tendrá por enderezada la acción, salvo oposición expresa de la parte actora. Si el trabajador actuare mediante apoderado se entenderá que el poder es suficiente para continuar la acción contra quien ha contestado la demanda.

Art. 42. — Deróganse los artículos 72, 73 y 74 de la ley 18.345.

Art. 43. — Sustitúyese el artículo 75 de la ley 18.345, por el siguiente:

Artículo 75: *Reconvención*. Al contestar la demanda, el demandado podrá deducir reconvención cuando ésta deba sustanciarse por el mismo procedimiento que aquella, ofreciendo la prueba referida a ella. El actor contestará la reconvención en el plazo de diez (10) días cumpliendo con la misma carga.

Art. 44. — Sustitúyese el artículo 76 de la ley 18.345, por el siguiente:

Artículo 76: *Excepciones*. Sólo serán admisibles como excepciones de previo y especial pronunciamiento la incompetencia, la falta de personería de las partes o de sus representantes, la litispendencia, la cosa juzgada, la transacción y la prescripción. Junto con la oposición de la excepción deberá ofrecerse toda la prueba referida a ella.

Para la procedencia del carácter previo de la prescripción será necesario que ella no requiera la producción de prueba. El actor deberá contestar las excepciones dentro del plazo de tres (3) días de notificado su traslado y ofrecer dentro del mismo plazo la prueba de aquéllas.

Art. 45. — Derógase el artículo 77 de la ley 18.345.

Art. 46. — Sustitúyese el artículo 80 de la ley 18.345, por el siguiente:

Artículo 80: *Providencia de prueba*. El juez, previa vista al fiscal, resolverá dentro del quinto día de contestado su traslado, las excepciones que no requieran prueba alguna.

En el mismo plazo contado a partir del auto que tenga por contestada la demanda, la reconvención

o las excepciones, proveerá al ofrecimiento de prueba rechazado por resolución fundada la que a su juicio fuera manifiestamente innecesaria, o tendiera a acreditar extremos ajenos a la forma en que quedara trabada la litis. Una vez examinada la prueba ofrecida y eliminada la superflua dispondrá que se produzca en primer lugar la correspondiente a las excepciones previas.

La audiencia para la prueba oral se deberá celebrar dentro de los diez (10) días posteriores al término del plazo que prescribe este artículo. En ella el juez intentará obtener de las partes un acuerdo conciliatorio.

En cualquier estado del juicio podrá decretar las medidas de prueba que estime convenientes, requerir que las partes litigantes reconozcan los documentos que se les atribuyan, interrogar personalmente a las partes, a los peritos y a los testigos y recabar el asesoramiento de expertos; también podrá reiterar gestiones conciliatorias sin perjuicio de las que obligatoriamente deberá intentar en oportunidad de celebrarse la audiencia prevista en el párrafo tercero *in fine*.

Asimismo, el juez proveerá la liquidación e intimará el pago de las sumas y créditos derivados de la relación de trabajo que hayan sido consentidos en forma expresa o tácita por las partes en cualquier etapa procesal.

Art. 47. — Sustitúyese el artículo 81 de la ley 18.345 por el siguiente:

Artículo 81: *Resolución de excepciones*. Para la resolución de las excepciones sujetas a producción de pruebas regirán las siguientes reglas:

- a) El juez resolverá las excepciones dentro de los cinco (5) días posteriores a la finalización de su prueba. Durante ese plazo el juez podrá suspender la recepción de la prueba del fondo del litigio;
- b) En todos los casos de rechazo total o parcial de excepciones en que la prueba del fondo del litigio haya quedado en suspenso, en la providencia en que se las resuelva se señalará en caso de que hubiera quedado pendiente, la nueva audiencia para recibir la prueba oral que se deberá celebrar en el plazo de diez (10) días.

Art. 48. — Derógase el inciso b) del artículo 82 de la ley 18.345.

Art. 49. — Sustitúyese el artículo 84 de la ley 18.345 por el siguiente:

Artículo 84: *Oficios y exhortos*. Los oficios dirigidos a jueces nacionales y/o provinciales y los exhortos serán confeccionados por las partes y firmados por el juez y el secretario en su caso, entregándose al interesado bajo recibo en el expediente.

Se dejará copia fiel en el expediente de todo exhorto y oficio que se libre.

Los pedidos de informes, testimonios y certificados, así como los de remisión de expedientes ordenados en el juicio serán requeridos mediante oficios firmados, sellados y diligenciados por el letrado patrocinante, con transcripción de la resolución que los ordena y que fija el plazo en que deberán remitirse.

Deberá otorgarse recibo del pedido de informes y remitirse las contestaciones directamente a la Secretaría con transcripción o copia del oficio.

El plazo para contestar el informe será de 20 días hábiles si se trata de oficinas públicas y de 10 días hábiles cuando se solicitare a entidades privadas.

Las partes deberán acreditar el diligenciamiento dentro de los sesenta días de la notificación del auto de apertura a prueba bajo pena de caducidad.

Art. 50. — Sustitúyese el artículo 85 de la ley 18.345 por el siguiente:

Artículo 85: *Prueba de confesión*. Únicamente en primera instancia cada parte podrá exigir que la contraria absuelva, con juramento o promesa de decir verdad, posiciones concernientes a las cuestiones que se ventilan. También se podrán pedir cuando se admita un hecho nuevo o se abra a prueba un incidente.

Art. 51. — Sustitúyese el artículo 89 de la ley 18.345 por el siguiente:

Artículo 89: *Prueba de testigos*. Cada parte podrá ofrecer hasta cinco testigos. Si la naturaleza del juicio lo justificare, se podrá admitir un número mayor. El juez designará la audiencia para interrogar en el mismo día, a todos los testigos. Cuando el número de los ofrecidos por las partes, permitiere suponer la imposibilidad de que todos declaren en la misma fecha, se señalarán tantas audiencias sucesivas como fueren necesarias, determinando cuántos testigos depondrán en cada una de ellas.

Los testigos que no comparecieran sin justa causa serán conducidos por medio de la fuerza pública, salvo que la parte que los propuso se comprometiere a hacerlos comparecer o a desistírslos en caso de inasistencia. La denuncia de un domicilio falso o inexistente por segunda vez obligará a la parte que propuso al testigo a asumir el compromiso de hacerlo comparecer o a desistirlo en caso contrario.

Los testigos serán citados con una anticipación no menor de tres días y en las citaciones se les hará conocer el apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública.

Art. 52. — Sustituir el artículo 91 de la ley 18.345 por el siguiente:

Artículo 91: *Alegato*. Terminada la prueba, el oficio o dentro de los tres días de producido por las partes, se pondrán los autos en Secretaría para alegar.

Las partes podrán presentar una memoria escrita sobre el mérito de aquélla dentro de los diez días de recibida la notificación mencionada en el inciso n° del artículo 48.

Si producida la prueba quedare pendiente únicamente la de informes, en su totalidad o parte, y ésta no fuere esencial, se pronunciará sentencia prescindiendo de ella, sin perjuicio de que sea considerada en segunda instancia si fuere agregada cuando la causa se encontrare en la alzada.

Art. 53. — Sustitúyese el artículo 95 de la ley 18.345 por el siguiente:

Artículo 95: Plazo para la sentencia. Desde el vencimiento del plazo a que se refiere el artículo anterior o desde que quedó notificado el auto que declaró la cuestión de puro derecho, se computará el plazo para dictar sentencia.

Art. 54. — Sustitúyese el primer párrafo del artículo 106 de la ley 18.345 por el siguiente:

Artículo 106: Inapelabilidad por razón de monto. Serán inapelables todas las sentencias y resoluciones, cuando el valor que se intenta cuestionar en la alzada, no exceda el equivalente a 150 veces el importe del derecho fijo previsto en el artículo 54, de la ley 23.187. El cileulo se realizará al momento de tener que resolver sobre la concesión del recurso.

Art. 55. — Se sustituye el artículo 149 de la ley 18.345 por el siguiente:

Artículo 149: Ofrecimiento de arbitraje. Si fracasaren las gestiones conciliatorias que se intentaren en cualquier estado del juicio se propondrá a las partes el sometimiento al arbitraje de todas o algunas de las cuestiones objeto del litigio.

Art. 56. — Para el cobro de los aportes y contribuciones previstos en las leyes 23.660 y 23.661 serán igualmente competentes los juzgados en lo civil y comercial de la jurisdicción que corresponda.

Art. 57. — Facilitase al Poder Ejecutivo a proceder al reordenamiento y remisiones del articulado de la ley 18.345.

TITULO XI

Institutos

Art. 58. — Los empleadores que celebren acuerdos conciliatorios o se sometan a la instancia arbitral del título IX, tendrán preferencia para acceder a los programas de empleo y formación profesional que gestione el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

TITULO XII

Reglamentación

Art. 59. — El Poder Ejecutivo a propuesta de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Justicia reglamentará la presente ley.

TITULO XIII

Vigencia

Art. 60. — El procedimiento creado por esta ley entrará en vigencia cuando lo dispongan los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Justicia, mediante resolución conjunta.

TITULO XIV

Adhesión de las provincias

Art. 61. — Invítase a las provincias a crear procedimientos de solución no jurisdiccional de conflictos individuales de trabajo.

Art. 62. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de las comisiones, 28 de junio de 1995.

Francisco de Durañona y Vedia. — Delfor A. Giménez. — Raúl Alvarez Echagüe. — Alberto E. Balestrini. — Osvaldo A. Bracchi. — Carlos E. Branda. — José L. Castillo. — Rodolfo Gazia. — Tomás González Cabañas. — Juan C. Maqueda. — María A. Salino. — Carlos A. Sueño.

En disidencia:

Naldo R. A. Brunelli. — Roberto S. Dignin.

En disidencia total:

Horacio F. Pernasutti.

INFORME

Honorable Cámara:

Las comisiones de Legislación del Trabajo y de Justicia han considerado el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se crea en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social una instancia previa a la demanda judicial, la que será apta para dirimir los reclamos individuales y plurindividuales que resulten de la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo. Asimismo se modifica la ley 18.345 de parodiamento laboral precorriendo la agilización de los juicios tratando de superar el actual divorcio que hoy existe entre la norma y la realidad; por lo que se crea innecesario abundar en más detalles que los expuestos en el mensaje que lo acompaña, por lo que los hacen suyos y así lo expresan.

Francisco de Durañona y Vedia.

Mensaje del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 18 de enero de 1995.

Al Honorable Congreso de la Nación,

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto

de ley mediante el cual se crea una instancia administrativa en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con carácter previo a la demanda judicial y con aptitud para suspender el curso de la prescripción. Esta instancia será apta para dirimir los reclamos individuales y plurindividuales que resultan de la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, de modo que se aligere notablemente el caudal de litigios ante dicho fuero, cuya cantidad en el corriente año ha superado a la estructura judicial.

El régimen previsto no incrementará el costo de solución de los diferendos laborales ya que se prevé la gratuidad para el trabajador y sus derechohabientes, a la par que los acuerdos conciliatorios a los que se arriben estarán exentos de impuestos, aportes y contribuciones.

El sistema que se propicia está estructurado a partir de la creación del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Registro Nacional de Conciliadores Laborales por el Ministerio de Justicia. La inscripción en este último registro requerirá poseer título de abogado y cumplir los demás recaudos que exija la reglamentación.

La designación del conciliador en cada proceso será efectuada por el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria mediante sorteo previo. Este funcionario deberá censurarse y podrá ser recusado en las mismas circunstancias previstas para los jueces en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

El honorario básico con que se retribuirá al conciliador será establecido por el Ministerio de Justicia y se incrementará proporcionalmente en caso de la obtención de un acuerdo conciliatorio o si laudase a consecuencia de habersele atribuido por las partes la calidad de árbitro.

Dichos emolumentos de los conciliadores, serán abonados íntegramente por los empleadores en el supuesto de arribarse a un acuerdo conciliatorio.

El fondo de financiamiento para el pago de los honorarios básicos se integrará con los recursos obtenidos de seis fuentes enumeradas en el artículo 14.

En los artículos 16 a 20 se establece un dual procedimiento en el que las partes podrán contar si lo desearan con patrocinio letrado, o el asesoramiento de la asociación sindical con personería gremial u organizaciones representativas de los empleadores, según el caso.

El conciliador tendrá amplias facultades para convocar a las partes a las audiencias que estime oportunas para el mejor cumplimiento de su cometido.

Se sancionará con una multa del cincuenta por ciento (50 %) del arancel que perciba el conciliador a la parte que incomparezca injustificadamente a la audiencia; el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social promoverá su ejecución previa certificación del conciliador de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la ley 18.695.

Al procedimiento de Conciliación Extrajudicial que se propone le será de aplicación supletoria la Ley General de Mediación y Conciliación y la ley 18.345.

El acuerdo conciliatorio deberá instrumentarse en un acta especial en la que deberán constar las firmas de las partes y de sus asistentes y representantes si se hallaren presentes.

Se prevé la homologación administrativa del acuerdo conciliatorio por ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y siempre que se logre una justa composición del derecho y de los intereses de las partes, dándose cumplimiento a lo exigido por el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo para la validez de los acuerdos laborales extrajudiciales.

El acuerdo homologado será ejecutable ante los juzgados nacionales de primera instancia del Trabajo de la Capital Federal según los procedimientos de ejecución de sentencia previstos en la ley 18.345.

Si la homologación es denegada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, éste certificará tal circunstancia quedando expedita la vía judicial para la iniciación de la pertinente demanda.

En el título IX se legisla sobre un procedimiento de arbitraje voluntario extrajudicial determinándose en el artículo 29 los puntos que deberá contener el mencionado compromiso.

El laudo será recurrible por ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal dentro del quinto día de notificado, y sólo se fundará en haberse laudado fuera de término o sobre puntos no comprometidos al arbitraje.

Con el fin de dar una mayor celeridad a los trámites procesales, se determina que juntamente con la demanda deberá ofrecerse toda la prueba. La notificación del traslado de la demanda al accionado, deberá efectuarse en un plazo no mayor de veinte (20) días corridos de recibido el expediente en el juzgado y con ella deberá ofrecerse la prueba instrumental y la restante que pretenda producirse. Una vez examinada toda la prueba ofrecida, el juez podrá ejercer su facultad ordenatoria, rechazando las pruebas superfluas. Se fijará una audiencia para la prueba oral; en ella el juez con conocimiento de toda la prueba intentará conciliar a las partes y podrá, en cualquier estado del juicio, decretar las medidas que estime convenientes, requerirá que las partes diligentes reconozcan los documentos que se les atribuyan, las interrogará personalmente, también a los peritos y a los testigos y recibirá el asesoramiento de expertos. Asimismo podrá reiterar gestiones conciliatorias.

Se introducen también modificaciones al trámite de las excepciones y se otorgan al juez facultades de instrucción de pago de los créditos derivados de la relación laboral, consentidos expresa o tácitamente por las partes en cualquier etapa procesal.

A fin de estimular los acuerdos conciliatorios se prevé que los empleadores que celebren acuerdos conciliatorios o se sometan a la instancia arbitral tendrán preferencia para acceder a los programas de empleo y formación profesional que gestione el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Los procedimientos proyectados y las reformas introducidas tienen como finalidad disminuir el índice de

litigiosidad creciente que afecta a la Justicia Nacional del Trabajo, al mismo tiempo que implementan un trámite rápido, sencillo y abreviado para la defensa de los derechos del trabajador, de relevante importancia, si tenemos en cuenta el carácter alimentario que revisten los créditos laborales y por lo tanto la necesidad de su inmediata realización.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 67

CARLOS S. MENEM.

Rodolfo C. Barra. — José A. Caro Figuerod.

ANTECEDENTE

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

LEY DE INSTANCIA OBLIGATORIA DE CONCILIACION LABORAL

TITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º — Los reclamos individuales y plurindividuales que versen sobre conflictos de derecho de la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, serán dirimidos con carácter obligatorio y previo a la demanda judicial, ante el organismo administrativo creado por el artículo 4º de esta ley, el que dependerá del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Art. 2º — El procedimiento será gratuito para el trabajador y sus derechohabientes.

Art. 3º — Los acuerdos alcanzados en la instancia de conciliación, así como las sumas abonadas como consecuencia de los mismos estarán exentos de impuestos y de aportes de los trabajadores y contribuciones de los empleadores con destino al régimen de la seguridad social.

TITULO II

Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria y Registro Nacional de Conciliaciones Laborales

Art. 4º — Créase el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el que tendrá a su cargo la sustanciación del procedimiento instaurado por esta ley.

Art. 5º — Créase el Registro Nacional de Conciliaciones Laborales dependiente del Ministerio de Justicia, el que será responsable de su constitución, depuración, actualización y gobierno.

Art. 6º — Para ser conciliador se requerirá poseer título de abogado y cumplir con las restantes exigencias que se establezcan reglamentariamente.

TITULO III

Demanda de conciliación

Art. 7º — El reclamante por sí, o a través de apoderado o representante sindical, formalizará el reclamo ante

el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, consignando sintéticamente su petición en el formulario que reglamentariamente se apruebe.

Esta presentación suspenderá el curso de la prescripción hasta la finalización del procedimiento de conciliación.

TITULO IV

Designación del conciliador

Art. 8º — El Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria designará por sorteo que de entre los inscritos en el Registro Nacional, un conciliador que entenderá en el reclamo interpuesto.

Art. 9º — El conciliador deberá —bajo pena de inhabilitación— excusarse de intervenir en el caso cuando concurren las causales previstas para los jueces en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Art. 10. — Las partes podrán recusar con causa al conciliador, en los casos previstos por el citado código. Si el conciliador rechazara la recusación, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social resolverá sobre su procedencia.

Art. 11. — El conciliador no podrá representar, patrocinar, o asesorar a quienes fueron partes en actuaciones en las que hubiera intervenido como tal, sino luego de dos años a partir de la fecha de su cese en el Registro Nacional de Conciliadores Laborales.

TITULO V

Retribución del conciliador

Art. 12. — El conciliador percibirá por su gestión en cada conflicto en que deba intervenir, cualquiera que sea el monto en discusión e independientemente de él, un honorario básico que determinará el Ministerio de Justicia.

Este honorario se incrementará en la proporción que fije la reglamentación cuando el trámite culmine en un acuerdo conciliatorio homologado o en un laudo dictado en el caso en que las partes defirieron al conciliador la calidad de árbitro.

Art. 13. — En los supuestos previstos en el artículo anterior el pago de los honorarios al conciliador estará a cargo del empleador y deberá efectivizarse dentro de los cinco (5) días corridos de notificada la homologación del acuerdo, o en su caso, dentro de los tres (3) días corridos de consentido o ejecutoriado el laudo.

El fondo de financiamiento del presente régimen tomará a su cargo el pago al conciliador del honorario básico a que se refiere el primer párrafo del artículo 12 cuando el trámite culminare sin acuerdo conciliatorio ni designación de conciliador como árbitro.

La eventual condena en costas pronunciada en sede judicial impondrá al empleador el reintegro al fondo, del honorario básico abonado al conciliador. En el caso de condena del empleador, la respectiva sentencia podrá imponer un recargo de ese honorario dentro de los márgenes que fije la reglamentación cuando mereciere en aquél un comportamiento abusivo que condujo a la frustración del trámite conciliatorio previsto en esta ley.

TÍTULO VI

Fondo de financiamiento

Art. 14.— Créase un fondo de financiamiento a los fines de solventar el pago de los honorarios básicos debidos a los conciliadores en el caso del segundo párrafo del artículo anterior y gastos administrativos del representante.

Dicho fondo estará integrado con los siguientes recursos:

- a) Los honorarios y recargos a que hace referencia el último párrafo del artículo anterior;
- b) Los depósitos que realicen el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social;
- c) Las donaciones, legados y toda otra disposición a título gratuito en beneficio del servicio;
- d) El monto de las multas a que hace referencia el artículo 19;
- e) Las sumas asignadas en las partidas del presupuesto nacional;
- f) Toda otra suma que en el futuro se destine al presente fondo.

Art. 15.— La administración del fondo de financiamiento estará a cargo del Ministerio de Justicia, instrumentándose la misma por vía de la reglamentación pertinente.

TÍTULO VII

Procedimiento de conciliación

Art. 16.— El Servicio de Conciliación notificará al conciliador designado para el caso, adjuntándole el formulario previsto en el artículo 7º, y citará a las partes a una audiencia que deberá celebrarse ante el conciliador dentro de los diez (10) días siguientes a la designación de éste. De lo actuado se labrará acta circunstanciada.

Art. 17.— Las partes podrán ser asistidas por un letrado, o —en el caso de los trabajadores— por la asociación sindical de la actividad con personería gremial, o —en el caso de los empleadores— por sus organizaciones representativas.

Art. 18.— El conciliador dispondrá de un plazo de treinta (30) días corridos —contados desde la celebración de la audiencia— para cumplir su cometido. Las partes, de común acuerdo, podrán proponer una prórroga de treinta (30) días, que el conciliador concederá si estima que la misma es conducente a la solución del conflicto. Tanto la concesión como la denegatoria de la prórroga serán irrecurribles.

Vencido el plazo sin que se hubiere arribado a una solución del conflicto, se labrará acta y quedará expedita la vía judicial ordinaria.

Art. 19.— Dentro del plazo anterior, el conciliador podrá convocar a las partes a las audiencias que entienda oportunas. Las incomparecencias injustificadas

serán sancionadas con una multa equivalente al cincuenta por ciento (50 %) del valor del arancel que perciba el conciliador por su gestión.

Con la certificación del conciliador, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social promoverá la ejecución de la multa de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la ley 18.695.

Art. 20.— En forma supletoria y en la medida en que resulten compatibles, al procedimiento de conciliación regulado por la presente ley le serán aplicables la Ley General de Mediación y Conciliación, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la ley 18.345.

TÍTULO VIII

Acuerdos conciliatorios

Art. 21.— El acuerdo conciliatorio se instrumentará en un acta especial firmada por el conciliador y por las partes, sus asistentes y sus representantes, si hubieren intervenido y se hallaren presentes.

Los términos del acuerdo deberán expresarse claramente en el acta especial.

Art. 22.— El acuerdo es sometido a la homologación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el cual otorgará cuando entienda que el mismo implica una justa composición del derecho y de los intereses de las partes conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Art. 23.— El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emitirá resolución fundada homologando o rechazando el acuerdo conciliatorio, dentro del plazo de tres (3) días contados a partir de su elevación.

Art. 24.— El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá formular observaciones al acuerdo, devolviendo las actuaciones al conciliador para que —en un plazo no mayor de diez (10) días—, intente lograr un nuevo acuerdo que contenga las observaciones señaladas.

Art. 25.— En el supuesto que se deniegue la homologación, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dará al interesado una certificación de tal circunstancia a los efectos del artículo 65, inciso 8º de la ley 18.345, quedando así expedita a las partes la vía judicial ordinaria.

Art. 26.— En caso de incumplimiento del acuerdo conciliatorio homologado, éste será ejecutable ante los juzgades nacionales de primera instancia del Trabajo por el procedimiento de ejecución de sentencia de los artículos 132 a 136 de la ley 18.345.

Art. 27.— Cada acuerdo conciliatorio se comunicará —con fines estadísticos— al Ministerio de Justicia.

TÍTULO IX

Arbitraje voluntario

Art. 28.— Si fracasare la instancia de conciliación, el conciliador podrá proponer a las partes que sometan voluntariamente sus discrepancias a un arbitraje, suscribiendo el respectivo compromiso arbitral.

Art. 29. — Aceptado el ofrecimiento, el compromiso deberá contener:

- a) Nombre del o de los árbitros;
- b) Puntos sujetos a arbitraje;
- c) Medios de prueba y plazos de ofrecimiento y producción;
- d) Plazo para el dictado del laudo;
- e) Los honorarios del árbitro y la forma de pago.

Art. 30. — El árbitro podrá recabar información y pruebas complementarias de las partes.

Art. 31. — El laudo será recurrible, dentro del quinto día de notificado, ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

El recurso sólo podrá fundarse en la circunstancia de haberse dictado el laudo una vez vencido el plazo acordado, o por haberse pronunciado sobre materias ajenas al compromiso arbitral.

Los laudos consentidos serán ejecutables ante los juzgados nacionales de primera instancia del Trabajo.

Art. 32. — A los fines de determinar el procedimiento arbitral, plazos y demás circunstancias procesales no previstas expresamente en la presente ley, se aplicarán los principios y la normativa establecidos en los artículos 756 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

TÍTULO X

Modificaciones a la ley 18.345

Art. 33. — Incorpórase como inciso 7º del artículo 65 de la ley 18.345 el siguiente:

Inciso 7º: La prueba instrumental y ofrecer todas las demás pruebas de que la actora intente valerse.

Art. 34. — Incorpórase como inciso 8º del artículo 65 de la ley 18.345 el siguiente:

Inciso 8º: Constancia de haber comparecido y agotado con carácter previo la instancia conciliadora.

Art. 35. — Sustitúyese el artículo 68 de la ley 18.345 por el siguiente:

Artículo 68: Si la demanda cumpliera con los requisitos del artículo 65 o subsanados los defectos mencionados, se dará traslado de la acción a la demandada por diez (10) días. En la notificación al demandado, que se efectuará dentro de un plazo no mayor de veinte (20) días de recibido el expediente en el juzgado, se deberá indicar su obligación de contestar la demanda, ofrecer prueba y oponer las excepciones que tuviere. Si el demandado se domiciliara fuera de la ciudad de Buenos Aires, estos plazos se ampliarán en razón de un (1) día por cada cien (100) kilómetros.

Art. 36. — Deróganse los artículos 69, 70, 71, 72 y 73 de la ley 18.345.

Art. 37. — Sustitúyese el artículo 74 de la ley 18.345, por el siguiente:

Artículo 74: La contestación de la demanda se formulará por escrito y se ajustará, en lo aplicable, a lo dispuesto en el artículo 65 de esta ley y en el artículo 356 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La carga prevista en el inciso 1º del artículo 356 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación no regirá respecto de los representantes designados en juicios universales.

Art. 38. — Sustitúyese el artículo 75 de la ley 18.345, por el siguiente:

Artículo 75: Al contestar la demanda, el demandado podrá deducir reconvenición cuando ésta deba sustanciarse por el mismo procedimiento que aquélla, ofreciendo la prueba referida a ella. El actor contestará la reconvenición en el plazo de diez (10) días cumplido con la misma carga.

Art. 39. — Sustitúyese el artículo 76 de la ley 18.345, por el siguiente:

Artículo 76: Sólo serán admisibles como excepciones de previo y especial pronunciamiento la incompetencia, la falta de personería de las partes o de sus representantes, la litispendencia, la cosa juzgada, la transacción y la prescripción. Junto con la oposición de la excepción deberá ofrecerse toda la prueba referida a ella.

Para la procedencia del carácter previo de la prescripción será necesario que ella no requiera la producción de prueba. El actor deberá contestar las excepciones dentro del plazo de tres (3) días de notificado su traslado y ofrecer dentro del mismo plazo la prueba de aquéllas.

Art. 40. — Derógase el artículo 77 de la ley 18.345.

Art. 41. — Sustitúyese el artículo 80 de la ley 18.345, por el siguiente:

Artículo 80: El juez, previa vista al fiscal, resolverá dentro del quinto día de contestado su traslado las excepciones que no requieran prueba alguna.

En el mismo plazo contado a partir del auto que tenga por contestada la demanda, la reconvenición o las excepciones, proveerá al ofrecimiento de prueba rechazando por resolución fundada la que a su juicio fuera manifiestamente innecesaria, o tendiera a acreditar extremos ajenos a la forma en que quedara trabada la litis. Una vez examinada la prueba ofrecida y eliminada la superflua dispondrá que se produzca en primer lugar la correspondiente a las excepciones previas.

La audiencia para la prueba oral se deberá celebrar dentro de los diez (10) días posteriores al término del plazo que prescribe este artículo. En ella el juez intentará obtener de las partes un acuerdo conciliatorio.

En cualquier estado del juicio podrá decretar las medidas de prueba que estime convenientes, re-

querir que las partes litigantes reconozcan los documentos que se les atribuyan, interrogar personalmente a las partes, a los peritos y a los testigos y recabar el asesoramiento de expertos; también podrá reiterar gestiones conciliatorias sin perjuicio de las que obligatoriamente deberá intentar en oportunidad de celebrarse la audiencia prevista en el párrafo tercero *in fine*.

Asimismo, el juez proveerá la liquidación e intimará el pago de las sumas y créditos derivados de la relación de trabajo que hayan sido consentidos en forma expresa o tácita por las partes en cualquier etapa procesal.

Art. 42. — Sustitúyese el artículo 81 de la ley 18.315 por el siguiente:

Artículo 81: Para la resolución de las excepciones sujetas a producción de pruebas regirán las siguientes reglas:

- a) El juez resolverá las excepciones dentro de los cinco (5) días posteriores a la finalización de su prueba. Durante ese plazo el juez podrá suspender la recepción de la prueba del fondo del litigio;
- b) En todos los casos de rechazo total o parcial de excepciones en que la prueba del fondo del litigio haya quedado en suspenso, en la providencia en que se las resuelva se señalará en caso de que hubiera quedado pendiente, la nueva audiencia para recibir la prueba oral que se deberá celebrar en el plazo de diez (10) días.

Art. 43. — Derógase el inciso b) del artículo 82 de la ley 18.315.

TITULO XI

Incentivos

Art. 44. — Los empleadores que celebren acuerdos conciliatorios o se sometan a la instancia arbitral del título IX, tendrán preferencia para acceder a los programas de empleo y formación profesional que gestione el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

TITULO XII

Reglamentación

Art. 45. — El Poder Ejecutivo a propuesta de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Justicia reglamentará la presente ley.

TITULO XIII

Vigencia

Art. 46. — El procedimiento creado por esta ley entrará en vigencia cuando lo dispongan los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Justicia, mediante resolución conjunta.

TITULO XIV

Adhesión de las provincias

Art. 47. — Invítase a las provincias a crear procedimientos de solución no jurisdiccional de conflictos individuales de trabajo.

Art. 48. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CARLOS S. MENENI

Rodolfo C. Baria. — José A. Caro Figueroa.

PRIMERA CITACION

Citación de reunión

Buenos Aires, 15 de junio de 1995.

Las comisiones de Legislación del Trabajo y de Justicia, se reunirán en la sala oficina 318, el día miércoles 21 de junio de 1995, a las 13 horas.

TEMARIO DE REUNION

84-P.E.-94 (T.P. Nº 178). — Mensaje 67 y proyecto de ley mediante el cual se crea una instancia obligatoria de conciliación laboral, previa a la instancia judicial. Modificaciones a la ley 18.315 de Procedimiento Laboral. (Legislación del Trabajo y Justicia)

César J. Colombo.

Secretario,
Comisión de
Legislación del Trabajo.

PLANILLA DE ASISTENCIA DE LOS SEÑORES DIPUTADOS

14. COMISION DE LEGISLACION DEL TRABAJO (Primera citación)

Reunión del 21 de junio de 1995

Diputados presentes: Osvaldo Borda, Alcides H. López, Delfor Giménez, Elisa B. Carea, José L. Castillo, Héctor H. Di Tulio, Rodolfo M. Gazia, Pedro J. Novati, María A. Salino y Carlos A. Sueiro.

Diputados ausentes con aviso: Luis S. Guerrero, Naldo R. Brunelli, Eduardo O. Camaño, Roberto Digón, Guillermo E. Estévez Boero, Raúl A. Calván, Germán L. Kammerath, Elsa D. Maidana, Alejandro M. Nieva, Rafael M. Pascual, Lorenzo Pepe, Horacio E. Pernasetti, Esteban J. Rodrigo, José Rodríguez y Claudio A. Sebastiani.

Por falta de quórum, se levanta la reunión.

S. COMISION DE JUSTICIA

(2.ª competencia)

Reunión del 21 de junio de 1995

Diputados presentes: Francisco de Durana y Vedia, Osvaldo Bracchi, Carlos E. Dellepiane y Tomás González Cabañas.

Diputados ausentes con aviso: Leopoldo Orpín, Horacio Pernasetti, Raúl Álvarez Echagüe, César Arias, Al-

berto E. Balestrini, Miguel A. Balestrini, Carlos A. Becerra, Carlos E. Branda, Orlando J. Gallo, Nicolás A. Garay, Juan O. Gauna, Elsa D. R. Kelly, Juan C. Maqueda, Enrique Mathov, Javier Meneghini, Mario R. Negri, Carlos Ernesto Soria, Raúl Trettel Meyer y Néstor A. Varela.

Diputado con licencia: Rogelio R. Cordera.

SEGUNDA CITACION

Citación de reunión

Buenos Aires, 21 de junio de 1935.

Las comisiones de Legislación del Trabajo y de Justicia, se reunirán en la sala 318, piso 3º, del edificio anexo del Congreso de la Nación, miércoles 28 de junio de 1935, a las 11 horas.

TEMARIO DE LA REUNION

84-P.E.-94 (T.P. Nº 178). — Mensaje 67 y proyecto de ley mediante el cual se crea una instancia obligatoria de conciliación laboral, previa a la instancia judicial. Modificaciones a la ley 18.345 de Procedimiento Laboral. (Legislación del Trabajo y Justicia.)

César J. Colombo.

Secretario
Comisión de
Legislación del Trabajo.

PLANILLA DE ASISTENCIA DE LOS SEÑORES DIPUTADOS

II. COMISION DE LEGISLACION DEL TRABAJO (Segunda citación)

Reunión del 28 de junio de 1935

Diputados presentes: Dólfor Giménez, Naldo R. Brunelli, José L. Castillo, Roberto Digón, Rodolfo M. Gáliz, Pedro J. Novau, Horacio E. Pernasetti y Carlos A. Sueiro.

Diputados ausentes con aviso: Osvaldo Borda, Alcides H. López, Elisa B. Carea, Luis S. Guerrero, Eduardo O. Camaño, Héctor H. Di Tullio, Guillermo E. Estévez Boero, Raúl A. Galván, Germán L. Kammerath, Elsa D. Maidana, Alejandro M. Nieva, Rafael M. Pascual, Lorenzo Pepe, Esteban J. Rodrigo, José Rodríguez, María A. Salino y Claudio A. Sebastiani.

8. COMISION DE JUSTICIA

Reunión del 28 de junio de 1935

Diputados presentes: Francisco de Durañona y Vedia, Osvaldo Bracchi, Horacio Pernasetti, Raúl Alvarez Echagüe, César Arias, Alberto E. Balestrini, Miguel A. Balestrini, Carlos E. Branda, Nicolás A. Garay, Tomás González Cabafías, Juan C. Maqueda, Carlos E. Soria y Néstor A. Varela.

Diputados ausentes con aviso: Leopoldo Orquín, Carlos A. Becerra, Carlos E. Dellepiane, Orlando J. Gallo, Juan O. Gauna, Elsa D. R. Kelly, Enrique Mathov, Javier Meneghini, Mario R. Negri y Raúl Trettel Meyer.

Diputado con licencia: Rogelio R. Cordera.

OBSERVACION

Buenos Aires, 5 de julio de 1935.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Alberto R. Pierri.

S/D.

De conformidad con lo dispuesto en el reglamento de la Honorable Cámara de Diputados, vengo a observar el dictamen publicado en el Orden del Día Nº 1.469 de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Justicia, referente al proyecto de ley para la creación del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria y el Registro Nacional de Conciliadores Laborales, y modificaciones a la ley 18.345.

I

El proyecto de ley crea el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Registro Nacional de Conciliadores Laborales, dependiente del Ministerio de Justicia, como una instancia previa a la demanda judicial ante el fuero laboral.

Uno de los fundamentos del proyecto de ley del Poder Ejecutivo para justificar la creación de esta instancia es el de "aligerar notablemente el caudal de litigios ante dicho fuero, cuya cantidad en el corriente año ha superado a la estructura judicial e implementar un trámite rápido, sencillo y abreviado para la defensa de los derechos del trabajador".

Esta resulta una mera afirmación, ya que no se encuentra respaldada por estadísticas que así lo demuestren y omite mencionar otras causas por las cuales el fuero laboral tiene dificultades para su correcto funcionamiento, como ser bajo presupuesto, el cierre de edificios donde se encontraban instalados varios juzgados laborales, etcétera.

En cuanto a la rapidez del trámite instaurado no debería señalarse como una virtud si la misma redundara en perjuicio de los derechos del trabajador, salvo que el Poder Ejecutivo quisiera hacer suyo el dicho popular que dice "más vale un mal arreglo que un buen juicio".

La celeridad es un valor primordial pero tiene que ir acompañada de equidad y la tutela estatal al más débil.

Consideramos negativa la obligatoriedad de esta instancia conciliatoria ya que la solución privada de un conflicto siempre debe ser optativa y el conciliador o mediador debe ser elegido por las partes.

Esta obligatoriedad no solamente es gravosa sino también irrazonable al establecerse como etapa o requisito previo de admisibilidad de la demanda, sin cuyo cumplimiento queda obstruido el acceso a la justicia, y esto introduce una desigualdad ante la ley que contraria un principio básico de nuestra Constitución.

Constantemente la orientación del Poder Ejecutivo y del equipo económico no sólo acerca los derechos laborales, sino que traba y dificulta el ejercicio de los pocos que aún sobreviven. Así, recientemente se impidió el ejercicio de la acción basada en el artículo

1.113 del Código Civil, y ahora se obliga a un laudo administrativo cuya naturaleza no tiene nada que ver con la conciliación.

En este proyecto el conciliador será un abogado de la matrícula cuya designación no requerirá los recaudos constitucionales previstos para ser juez nacional y, al desarrollarse todo el procedimiento de conciliación en el ámbito del Ministerio de Trabajo, no se garantiza su imparcialidad ya que el ministro de Economía ha embestido contra las propias sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando contrarian su inmemorial filosofía neoconservadora.

El quehacer del conciliador no estará sometido a los sucesivos controles judiciales, afectándose las bases del estado de derecho, ya que será designado por el poder administrador para desempeñar funciones que actualmente cumple la Justicia.

No puede dejar de señalarse la desigualdad cultural, económica e informativa de las partes y la presión que sufrirá el trabajador ante la recesión y desempleo actuales para aceptar conciliaciones que no les sean del todo favorables, ante la ausencia de un tercero imparcial (el juez) que tutele a la parte más débil de la relación laboral (el trabajador).

Estos conceptos no constituyen un alegato sino que son la razón de ser, la base de la existencia del derecho laboral.

En lugar de implementar la adecuación de las estructuras judiciales para tornar eficiente el servicio de justicia, se promueve una iniciativa tendiente a limitar, desalentar o dificultar el acceso a los tribunales judiciales.

La difusión de los métodos alternativos es específicamente un problema cultural personal y social, en el que gravitan una serie de factores entre los que ocupan un lugar privilegiado la información y la fidelización de la población.

Se delega la actividad jurisdiccional a los particulares y el Estado deja de cumplir una función esencial, como es la de administrar justicia.

En la práctica, con este proyecto se demuestra una vez más que el Poder Ejecutivo no comprende o tiene una concepción ignota de la fundamentación.

El bien supremo no puede ser la conciliación, sino que se debe aspirar a impartir justicia y hacer cumplir la ley.

II

La demanda de conciliación deberá ser formalizada por el reclamante por sí, o a través de apoderado o representante sindical (artículo 7º), y asimismo las partes deberán ser asistidas en las audiencias que pueden designarse durante el procedimiento por un letrado o por representante sindical o empresario (artículos 17 y 19). Es decir que en ninguno de los casos es imprescindible la presencia de un abogado, ya que en el primer caso directamente no se lo menciona y en el segundo la conjunción "o" también podrá llevar al mismo resultado.

Se establece que el reclamo deberá ser consignado sintéticamente en un formulario que apruebe la reglamentación (artículo 1º) en sustitución del escrito de demanda.

Si la conciliación fracasa, habrá dos piezas descriptivas de las pretensiones del actor, porque al escrito de demanda judicial se agregará la exposición efectuada en el formulario administrativo.

Si no hubiera coincidencia entre ambos, aunque fuera parcialmente, nos resulta preocupante que no se aclare si significará que el juez deberá decidir la cuestión de oficio o si debe ser materia de alguna excepción por la parte demandada.

El conciliador sólo podrá ser recusado por las partes con causa (artículo 10) a diferencia de lo dispuesto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (artículos 14 a 16), donde se prevé la recusación sin causa para los jueces de primera instancia. O sea que se asimila a los jueces sólo parcialmente y en perjuicio de las partes.

El conciliador recibe un honorario básico por cada conflicto, determinado por el Ministerio de Justicia, y que se incrementará cuando el trámite finalice con un acuerdo conciliatorio homologado o en un laudo dictado (artículo 12), en una proporción que la ley no determina y que deja librada a la reglamentación, pero sí menciona expresamente el porcentaje del pacto de cuota litis que están facultados para firmar los letrados intervinientes (artículo 17, último párrafo).

El aumento del honorario básico del conciliador quedará a cargo del empleador y, por lo tanto, el primero tendrá un interés particular de conciliar rápidamente el litigio, con una posible inclinación de favorecer a quien abonará su retribución.

La posibilidad que tiene el conciliador para convocar a las partes a las audiencias que entienda oportunas (artículo 19) queda librado a su discreción.

Podemos suponer que, dado que el honorario del conciliador se incrementa cuando el trámite culmina en un acuerdo conciliatorio, las audiencias pueden multiplicarse hasta llegar al agotamiento o el hartazgo a fin de obtener una conciliación.

Se crea un fondo de financiamiento para solventar el honorario básico del conciliador y gastos administrativos del representante pero no se establece claramente cómo se solventará este fondo (artículo 14).

Se ignora cuál será el origen de los recursos que menciona, tales como los depósitos que realicen los ministerios de Justicia y Trabajo y Seguridad Social (inciso b), y qué ocurrirá en el caso de que los mismos no se efectivicen.

Tampoco se establece qué consecuencias traerá el no contar con las partidas suficientes del presupuesto nacional (inciso c) cada vez más requerido y más recortado.

No se determina cuáles son los gastos administrativos del representante y a cuál se refiere.

Las reservas respecto del conciliador se acentúan en el caso del árbitro, también privado. Ese arbitraje tendrá el carácter de una sentencia apelable ante la Cá-

mara Nacional de Apelaciones del Trabajo, es decir que un abogado particular suplirá la función del juez de primera instancia laboral.

Esta figura no tiene antecedentes en materia laboral en nuestro país ya que sólo rigen arbitrajes privados en la solución de conflictos individuales en Estados Unidos de América y Canadá con una tradición cultural y normativa diferente. Allí la fuente principal es el *common law* y el convenio colectivo de trabajo, y en nuestro sistema normativo es la ley. Allí un árbitro designado y remunerado por los poderosos sindicatos americanos y la empresa lauda, pero no aplica la ley, sino sólo el convenio colectivo.

III

La privatización parcial de la justicia que resultará como corolario de este proyecto de ley, se postula en un marco de desprotección laboral, de desprestigio y restricción a la justicia, y al derecho constitucional de defensa en juicio.

La figura del juez laboral garantiza actualmente el cumplimiento de las leyes protectoras del trabajo y es una figura insustituible en su carácter de autoridad imparcial especializada.

Se demuestra una vez más la tendencia, incentivada por los organismos internacionales de privatización de la justicia, a derivar los recursos estatales hacia otros fines, fundamentalmente, el pago de la deuda.

De dictar normas contrarias a la Constitución Nacional y que dilatan innecesariamente el proceso para el reconocimiento de un legítimo derecho (ley 21.463 de solidaridad previsional) se llega ahora a instrumentar medios para eludir directamente el someterse a la justicia.

Los conflictos laborales se deben fundamentalmente a profundas injusticias sociales no atendidas y al incumplimiento de las normas laborales.

La conciliación administrativa, que prevía la ley 18.345, ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social resultó un fracaso y las estadísticas oficiales informan un bajo índice de conciliación debido al evidente perjuicio que sufría el trabajador cuando la aceptaba.

El gobierno nacional alega que el aumento de la tasa de desempleo se debe a la demora en la sanción de determinadas leyes laborales que considera imprescindibles para flexibilizar las relaciones laborales, argumento que nosotros no podemos compartir: el desempleo y la recesión no tienen su origen en el derecho laboral sino en las medidas económicas impuestas por el Ministerio de Economía.

Resulta difícil aceptar la sanción de normas que dejan de lado derechos de los trabajadores, conseguidos después de muchos años de lucha y reivindicaciones sociales, realizadas con promesas de revolución productiva, de creación de empleos, de un bienestar social que no se advierte en la población en general.

La transformación económica es un medio para elevar el bienestar del hombre y no un fin en sí misma, y sólo puede llevarse a cabo en una democracia con

contenido social. Todo crecimiento sustentable está al servicio de los pueblos y se caracteriza por su contenido solidario y respetuoso del medio ambiente.

Guillermo E. Estévez Boero.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: luego de escuchar la lectura de la nómina de señores diputados anotados para hacer uso de la palabra en general en relación con el tema que nos ocupa, como cuestión previa quisiera mencionar que después de efectuar consultas con algunos de los bloques que integran la Cámara, estimamos razonablemente que se podría votar a las 21 y 30.

Queremos poner esto en conocimiento de todos los señores legisladores a fin de obtener el consenso de la Cámara sobre ese aspecto.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Si hay asentimiento, se procederá a votar en general, luego de concluida la lista de oradores, a las 21 y 30.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: deseo aclarar que nuestra sugerencia implica que los señores diputados pueden inscribirse en la lista de oradores para el debate en general, la cual posteriormente será cerrada.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Señor presidente: voy a formular una observación con respecto a lo que se acaba de expresar.

En principio, aclaro que no me opongo a la propuesta formulada por el señor diputado Matzkin, pero señalo dos cuestiones. En primer término, que la oportunidad en la que cada diputado resuelve anotarse en la lista de oradores es libre, porque no hay una resolución que determine el cierre de debate con listas de oradores.

En segundo lugar, destaco un inconveniente en cuanto a fijar la hora de votación, inconveniente que estamos presenciando en este momento, porque cada vez que se realiza esta indicación la Cámara queda desierta y el debate se convierte en un acto casi ridículo, al menos en un Parlamento que posee un reglamento como el nuestro; no sé qué sucederá en otros que tienen una distinta normativa para su funcionamiento interno.

Por ello, me parece que en el futuro este aspecto podría materializarse en una conversación privada, ya que el anuncio público deja al debate sin razón de ser.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). — Señor presidente: me corresponde desempeñar el papel de miembro informante del proyecto de ley que nos ocupa.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — La Presidencia ruega a los señores diputados que guarden silencio a fin de escuchar al orador.

Sr. Castillo (J. L.). — Señor presidente: aclaro a la Honorable Cámara que me veo en la obligación de desempeñar la tarea de informar sobre el proyecto de ley en consideración en razón de que el señor diputado Borda se encuentra de licencia por enfermedad.

El proyecto de ley sobre instancia obligatoria de conciliación laboral es una iniciativa que trata de agilizar mediante una instancia previa la solución de los reclamos formulados en el campo laboral. Básicamente por los trabajadores, los cuales, a raíz del tiempo que actualmente demora la Justicia para expedirse —entre tres y cinco años—, se ven perjudicados económicamente.

Escuché atentamente la exposición del señor diputado Durañona y Vedia al referirse al proyecto de ley de mediación que acabamos de sancionar, y admito que desearía tener su capacidad oratoria y sus conocimientos técnicos para presentar este instituto de la conciliación laboral, ya que si tomáramos los conceptos utilizados por el citado señor diputado para exponer sobre la figura de la mediación, evitaríamos conceptos al presentar este proyecto de ley.

El proyecto de ley en consideración crea una instancia administrativa de conciliación laboral que va a funcionar en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con carácter previo a la demanda judicial.

Esta instancia será apta para dirimir los reclamos que resulten de la competencia de la Justicia nacional del trabajo, lo cual disminuirá el candel de litigios ante el mencionado fuero.

El régimen para el trabajador y sus derechohabientes, a la par que los acuerdos conciliatorios a los que se arribe, estarán exentos de impuestos, aportes y contribuciones.

El sistema que se propicia está estructurado a partir de la creación del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Registro Nacional de Conciliadores Laborales en el Minis-

terio de Justicia. La inscripción en este último registro requerirá poseer título de abogado y cumplir los demás recaudos que exija la reglamentación.

La designación del conciliador en cada proceso será efectuada por el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria mediante sorteo previo. El honorario básico con que se retribuirá al conciliador será establecido por el Ministerio de Justicia y se incrementará proporcionalmente en caso de la obtención de un acuerdo conciliatorio.

Se establece un ágil procedimiento en el que las partes podrán contar, si lo desearan, con patrocinio letrado o el asesoramiento de la asociación sindical con personería gremial u organizaciones representativas de los empleadores, según el caso.

El acuerdo conciliatorio deberá instrumentarse en un acta especial en la que deberán constar las firmas de las partes y de sus asistentes y representantes si se hallaren presentes.

Se prevé la homologación administrativa del acuerdo conciliatorio por ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y siempre que se logre una justa composición del derecho y de los intereses de las partes, dándose cumplimiento a lo exigido por el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo para la validez de los acuerdos laborales extrajudiciales.

El acuerdo homologado será ejecutable ante los juzgados nacionales de primera instancia del trabajo de la Capital Federal. Si la homologación es denegada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social quedará expedita la vía judicial para la iniciación de la pertinente demanda.

También se legisla sobre un procedimiento de arbitraje voluntario extrajudicial, determinándose en el artículo 29 los puntos que deberá contener el mencionado compromiso. El laudo será recurrible por ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal dentro del quinto día de notificado.

Se modifica la ley 18.345, determinando que juntamente con la demanda deberá ofrecerse toda la prueba. La notificación del traslado de la demanda al accionado deberá efectuarse en un plazo no mayor de veinte días corridos de recibido el expediente en el juzgado y con la contestación de la demanda deberá acompañarse la prueba documental y ofrecerse la restante.

El juez podrá ejercer su facultad ordenatoria rechazando las pruebas superfluas. Se fijará una audiencia para la prueba oral; en ella el juez, con conocimiento de toda la prueba, intentará

conciliar a la partes y las interrogará personalmente. Asimismo podrá interrogar a los peritos y a los testigos y podrá reiterar las gestiones conciliatorias.

Se otorgarán al juez facultades de intimación de pago de los créditos derivados de la relación laboral, consentidos expresa o tácitamente.

Los procedimientos proyectados y las reformas introducidas tienen como finalidad disminuir el creciente índice de litigiosidad que afecta a la justicia nacional del trabajo, al mismo tiempo que implementar un trámite sencillo y abreviado para la defensa de los derechos del trabajador, lo que es de relevante importancia si tenemos en cuenta el carácter alimentario que revisten los créditos laborales y la necesidad de su inmediato cobro.

En esa última frase está incluido el fundamento de este proyecto de ley y que hoy comenzamos a tratar. Imperiosamente necesitamos construir un instrumento legal que permita a los trabajadores concurrir a una instancia conciliatoria para solucionar sus problemas, sin tener que caer permanentemente en juicios en los cuales a veces no acceden a ver concretados sus reclamos porque se mueren antes.

Con estos breves fundamentos, agregados a los que se expresaron en la consideración del proyecto de ley sobre mediación, hemos hecho la introducción al tratamiento de un tema que dará una solución a los reclamos cotidianos de los trabajadores en la Argentina. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Romero, C. A.).—Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. López (A. H.).—Señor presidente: bien pueden decir desde la Presidencia de la banca oficialista que con respecto a las leyes laborales cumplieron los deberes. En primer lugar, aprobaron el proyecto de ley de flexibilización laboral, con el voto negativo de la bancada radical. Mañana, van a considerar el proyecto de ley de concursos y quiebras, que va a causar graves perjuicios a los trabajadores. Y hoy, se está tratando el proyecto de ley de conciliación obligatoria, donde los trabajadores van a carecer de la garantía del procedimiento judicial, ya que toda la tramitación se realizará en sede administrativa, lo que va a afectar los derechos irrenunciables que han adquirido. Quizás esto sea revisado por el juez del trabajo para ver si es cierto. Es decir, salimos del ámbito de la justicia y nos introducimos en sede administrativa con el argumento de que hay que acelerar el proceso, que la justicia está sobrecargada y que hay que bajar los costos. Nosotros entendemos que nada de esto va a pasar.

Quienes defendieron con distintos criterios —a veces opuestos— la conciliación obligatoria, seguramente verán agravadas sus dudas toda vez que los que van a conciliar no se encuentran en la misma situación jurídica, económica y técnica. El trabajador generalmente se encuentra en inferioridad de condiciones, razón por la que se hace indispensable que negocie una conciliación frente a alguien que tenga un conocimiento jurídico suficiente como para ver si están o no afectados sus derechos irrenunciables. No nos olvidemos que podría llegar a homologarse un acuerdo que avance sobre normas de orden público laboral.

Todo esto nos ha llevado a decir en comisión que rechazaremos el proyecto en su totalidad, por lo que adelanto el voto negativo de la bancada radical.

La conciliación obligatoria es un contrasentido. Lo dicen sus mismas palabras, porque no se puede conciliar nunca en forma obligatoria. El contrasentido se advierte mucho más en materia laboral, donde la situación jurídica de las partes no es la misma; por eso existía en la Argentina el derecho laboral que poco a poco vamos exterminando con las sanciones que esta Cámara está produciendo. Esto ha llevado a que un prestigioso tratadista del derecho laboral, el docto Cabanellas, dijera: "Por ello la transacción obtenida por el temor a un pleito largo y costoso, incluso para la parte vencedora, adolece de vicios del consentimiento que se presta en estas condiciones."

El trabajador no está en igualdad de condiciones. Como dijo el señor diputado proponente, por tratarse de una prestación alimentaria el trabajador está condicionado a obtener un acuerdo rápidamente. Pero curiosamente este proyecto tampoco cubre los otros problemas, como ya vamos a ver.

No ha sido feliz el instituto de la conciliación obligatoria ensayado ya en la Argentina con las leyes 14.786 y 16.936, así como con el decreto ley 33.347, que en diversas oportunidades pretendieron instrumentarlo. No ha sido feliz este instituto pese a que actualmente, en la Capital Federal, que es donde está planteado el problema —a pesar de que se quiere legislar para todo el país—, se concilian un tercio de los juicios, lo que no es poco y se lo hace frente a jueces, con la garantía de que no se avanza sobre el orden público laboral ni sobre los derechos irrenunciables del trabajador. Por ejemplo, si el patrón reconoce que adeuda remuneración, no se puede conciliar, y ésta es la garantía que da la justicia.

No es cierto que esté aumentando la litigiosidad laboral.

Si algo he aprendido en mi paso por esta Cámara es que casi nunca, salvo excepciones, se aprueba un proyecto de un legislador de la oposición, por más bueno que sea. En algún momento, procurando solucionar el problema que se planteaba por el atraso de la justicia laboral en la Capital Federal, y teniendo en cuenta que la cuestión se agravaba porque se debía desalojar el edificio correspondiente por el peso de los expedientes, presentamos un proyecto de ley para ser considerado por la Comisión de Legislación del Trabajo; eso ocurrió hace dos años y hasta ahora no se trató.

Pero como algo aprendimos, decidimos enviar el proyecto al Ministerio de Justicia, con una nota en la cual señalábamos al ministro que entre los antecedentes se recordaba lo que había implementado un gobernador justicialista en la provincia de Entre Ríos, ante un atraso similar ocurrido en los tribunales de mi ciudad, Concordia, en los que se crearon juzgados de sentencia especiales ad hoc que tomaron y resolvieron expedientes amontonados que los jueces no daban abasto para analizar.

Ese proyecto también se lo enviamos al presidente de la República, al ministro de Trabajo, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal. La iniciativa llevaba mi firma, la del señor diputado Gaurana y la de otros legisladores de la bancada radical. Aunque parezca un contrasentido, pese a no ser tratado por la Comisión de Legislación del Trabajo, el presidente de la República me contestó que el proyecto le parecía bien, y que daría instrucciones al ministro de Justicia para que de alguna manera se instrumentara. Así sucedió a través de una acordada de la Corte Suprema.

Actualmente están funcionando los juzgados de sentencia, con este resultado: en 1994, ingresaron un total de 48.832 expedientes según estadísticas oficiales de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, de los cuales 31.310 corresponden a despidos y accidentes y en ese mismo lapso se resolvieron en total 53.411 expedientes, es decir, entraron menos expedientes que los que salieron despachados.

Nosotros creemos que el proyecto en consideración no acelera el procedimiento; tampoco da garantías al trabajador en cuanto a la defensa de sus derechos y por otra parte provoca des-

igualdad de condiciones, ya que el Ministerio de Trabajo de la Nación no tiene en todo el país infraestructura suficiente como para que antes de cada litigio se puedan conciliar las controversias laborales, incluso las colectivas. Por ejemplo: si se saca la tutela a un sindicato no creemos que el Ministerio designe un conciliador para que entienda en la cuestión.

Reitero que no tiene la infraestructura necesaria y cualquier legislador que se haya interesado en la cuestión laboral, aunque no sea un sindicalista, tiene conocimiento de esto. La realidad es que se ha ido dismantelando el Ministerio de Trabajo de la Nación. Además, creemos que este procedimiento va a alargar irremediablemente —en 75 días si funciona bien, y en más de 120 o en 180 días, en caso contrario— la iniciación de un proceso que tiene entre sus variables más notorias —en la mayor cantidad de los casos— el reclamo de prestaciones de carácter alimentario.

Mi experiencia de 26 años de ejercicio de la profesión de abogado, de un lado y del otro en la relación del trabajo, defendiendo gremios u obreros y también empresas, me dice que generalmente el empresario no concilia hasta no saber a ciencia cierta que no tiene ningún derecho, que la instancia dilatoria de la acción judicial se está acabando y que prontamente tendrá que pagar.

Generalmente, se trata de conciliar avanzando sobre algunos de los aspectos de la relación que no pueden dejarse de lado respecto del trabajador. Rara vez he visto una conciliación donde se pague un poco más de lo reclamado, y ello seguramente fue por error de alguno de los abogados o del propio empresario que estaba involucrado en la relación.

¿Por qué hablo de una demora de 75 días? Sucede que para nombrar un conciliador existe un plazo de diez días; éste tiene treinta días para intentar conciliar, después de la primera audiencia, y a continuación se dan treinta días más por acuerdo de partes. En el ámbito del proyecto de ley que se discutió hace un tiempo, y como ha sido tradición en materia de conflictos individuales de trabajo, después de la primera audiencia —cuando intervinieron el Ministerio de Trabajo a nivel nacional y a nivel provincial, así como también las direcciones o subsecretarías provinciales— el trabajador puede desistir de la instancia en sede administrativa y recurrir inmediatamente a la sede judicial.

El Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por la Convención Constituyente celebra-

da el año pasado, indica que nadie puede ser privado del derecho de ser oído rápidamente por un tribunal judicial, inclusive cuando se trata de conflictos laborales. Esto va a provocar que el trabajador se vea privado durante un lapso importante de 75 días en el mejor de los casos —seguramente mucho más por la carencia de la infraestructura necesaria en el Ministerio de Trabajo, por la carencia de experiencia en esta materia y por las dificultades propias de su instrumentación— de recurrir a la Justicia y de hacerse oír en el reclamo de las garantías que la Constitución Nacional le otorga según la ratificación del Pacto de San José de Costa Rica que figura como una parte normativa de nuestra Carta Magna.

Estas razones me bastan para decir que no estamos de acuerdo con esta iniciativa. Tenemos muchísimas más dudas que las que nos surgieron cuando se planteó el proyecto de conciliación obligatoria para todos los juicios. Tenemos una serie de observaciones que las haremos llegar por escrito a la Presidencia para que sean insertadas en el Diario de Sesiones, y como fundamento de la oposición de la bancada radical a la sanción de esta norma que vamos a votar negativamente en todas sus partes.

Sr. Presidente (Romero, C. A.).— Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Flores.— Señor presidente: hace pocos días, en la tapa del diario "Clarín", apareció una noticia que daba cuenta de un hecho de la vida cotidiana. En un partido de fútbol jugado entre amigos un hombre había ocasionado la fractura de la pierna a otro jugador. Ante este acontecimiento, la Justicia, en segunda instancia, valoró que la indemnización que le correspondía a quien había sufrido el accidente era de 120 mil dólares.

El señor presidente se preguntará qué relación tiene esta anécdota en este momento en que estamos considerando un proyecto de ley sobre conciliación obligatoria en materia laboral. El hecho es que hace pocos días, en este lugar, con el voto de la mayoría, se había valorado la vida humana en materia laboral en 55 mil pesos, menos de la mitad de lo que puede resultar valorada una fractura de una pierna de cualquier ciudadano.

Quiere decir que la realidad nos mostró con toda crueldad lo vergonzosa que había resultado la sanción anterior y cuán lesiva era la norma del artículo 39 de la ley de accidentes de trabajo, precisamente para los trabajadores.

Traigo a cuenta esta anécdota porque me pregunto con qué nos vamos a encontrar más ade-

lante. Posiblemente no nos encontraremos con la espectacularidad que una noticia de este tipo tiene cuando las consecuencias de una norma se hacen sentir en quienes, más que destinatarios de una reforma del régimen laboral en la República Argentina, resultarán víctimas de un mecanismo que fomentará la corrupción que tanto indigna al ministro de Economía, que se llena la boca cuando habla de la industria del juicio y denuncia la connivencia entre jueces, peritos y abogados.

En caso de ser aprobada, esta ley sin lugar a dudas favorecerá la corrupción en la Justicia laboral, lo que debiera escandalizar al ministro. Sin embargo, como esto se hace en perjuicio de los que trabajan, al ministro de Economía no se le mueve un pelo; y no se trata de una ironía.

También esta norma tendrá incidencia sobre otro de los temas que desvelan a muchas autoridades: la dilación de las causas laborales. En realidad, a muchos funcionarios del gobierno les preocupa la dilación de los juicios, pero como se trata de un perjuicio para los que trabajan y de una fenomenal herramienta de coerción, no les quita el sueño lo que pueda ocurrir con esta norma.

Al imaginar el escenario en que se redactó el texto de este proyecto, uno piensa en el ministro de Trabajo y tiene la impresión de que posiblemente jamás haya intervenido en un litigio que involucre a trabajadores y patrones. Pareciera que todo lo que sabe de derecho laboral lo aprendió en una burbuja, al margen de la realidad. Uno lo imagina redactando este proyecto y pensando que había encontrado la piedra filosofal, la solución para todos los tiempos de los innumerables problemas que diariamente aparecen en materia de Justicia del trabajo.

Es así que imaginó un sistema en el que se olvida un elemento fundamental. A diferencia de los conflictos colectivos, cuando un trabajador reclama individualmente no está defendiendo derechos laborales colectivos, los que sí se defienden cuando reclaman los trabajadores en su conjunto.

Cuando un solo hombre va a discutir porque no le pagaron el sueldo, porque no le liquidaron las horas extras, porque no le otorgaron los beneficios que le correspondían o porque la liquidación de haberes fue mal hecha, lo que está defendiendo es su derecho a alimentarse. No está defendiendo derechos laborales, por más que técnicamente así sea.

El trabajador va disminuido a la instancia del juicio. Se trata de un hombre a quien se le ha quitado el dinero que le hacía falta para alimentar a su familia. Cualquiera que haya tenido alguna relación —no es el caso de los ministros de Trabajo o de Economía— con una persona que siente que ha sido despojada de su salario o de algunos de los elementos que lo componen, conoce perfectamente qué es lo que tiene enfrente. El señor diputado preopinante decía recién que ello lo saben quienes alguna vez tuvieron contacto con un hombre o una mujer desesperados que quieren que se les pague rápido.

Este proyecto busca que se abone sin pérdida de tiempo, pero apunta a la menor suma posible, montándose en el estado de necesidad e indefensión en que se encuentra *ab initio* el trabajador que va a reclamar. Precisamente, se bajan los costos laborales a costa de los trabajadores.

Esta norma se complementa con la ignominia de la iniciativa sobre accidentes de trabajo. En aras del fundamentalismo del mercado surge la pregunta de cómo hacer para mejorar las ganancias de las empresas a costa de la gente. Este es uno de los métodos que se avocinan y que se presenta entre los más duros.

Vale inquirir por qué el trabajador no tiene la obligación de contar con un asesor o un abogado que lo acompañe. Dado que el Estado o el empleador son los que terminarán pagando los honorarios de los profesionales intervinientes, el abogado del trabajador también debería ser costeadado por el empresario. Existe en este tema una desigualdad notable. Sobre cien casos, creo que debe existir uno solo en el que a la audiencia concurre el titular de la empresa; en los demás lo reemplazan su apoderado o su abogado; en cambio, el trabajador va solo.

Imaginemos la escena de un trabajador a quien un señor —que hace de conciliador— le sugiere que arregle rápido, porque en caso contrario sobrevendría un juicio que va a tardar mucho tiempo. Ese conciliador piensa cuánto recibirá si logra el acuerdo que disminuya de la mejor manera posible las pretensiones del trabajador, beneficiando al empleador, ya que el perjuicio de una parte constituye el beneficio de la otra.

Estamos abriendo las puertas a un proceso fenomenal de corrupción en la justicia laboral. Las estadísticas indican que en los juicios en los que existe la conciliación —que en la actualidad no es obligatoria— se transa por el 25 por ciento

del reclamo. ¿Qué ocurrirá cuando exista la obligación de recurrir siempre a esta instancia, sin que el trabajador esté acompañado por su asesor?

Si lo que quería era mejorar el sistema de la Justicia del trabajo, no se han realizado las inversiones que se deberían hacer para desahogarla de los expedientes que se amontonan hasta el techo en los juzgados correspondientes. Si lo que se buscaba era establecer una instancia previa ágil que resolviese los casos y evitara tener que ir a juicio, ¿por qué no se invirtió en lo que ya existe, es decir, las instancias de conciliación que dependen del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde por falta de presupuesto un mismo empleado es el que escribe a máquina, el que envía las cartas, el que abre la puerta y el que atiende a las partes?

Se está montando un sistema mucho más caro, a no ser que estemos pensando en que será solventado *in totum* por la parte empresarial. Si el Estado deposita su esperanza de financiamiento en una de las partes —la más poderosa— que va a intervenir en la contienda de intereses, entonces ya sabemos hacia dónde se ha inclinado. Un principio básico del derecho laboral indica que el Estado tiene la obligación de equilibrar las cargas favoreciendo siempre a la parte más débil, menos protegida y más necesitada de la relación entre el patrón y el obrero, que precisamente está representada por este último.

Uno imagina que el principio del *in dubio pro operario*, que durante tanto tiempo ha regido en materia de conflictos laborales, se va a transformar en letra muerta o en un principio abstracto en el caso de que se sancione este proyecto de ley, que viene a complementar leyes sancionadas con anterioridad, todas las cuales apuntan a un mismo objetivo. No se trata de tener una justicia más ágil y eficiente; el objetivo exclusivo es el de bajar los costos y mejorar la rentabilidad de las empresas, y ello se ha encuanado por las vías menos apropiadas.

Wéleblemente se piensa que de esta manera habrá mayor eficiencia, cuando en realidad tendremos más y mayor desprotección. Esto nos enfrenta con realidades crueles como las que señalé al comienzo de esta exposición, de las que dan cuenta los diarios y las radios en el día de hoy: el 25 por ciento de ocupados y subocupados en la Capital Federal y en el Gran Buenos Aires tienen severos problemas de empleo. Seguimos con severos problemas de empleo.

Ahora va a ser más fácil: les van a pagar menos. Las indemnizaciones por despido se van a arreglar entre un empresario y un señor que no sabemos quién será, con qué criterios será

seleccionado ni si deberá entender en materia de derecho del trabajo. Nos va a hacer olvidar de algún funcionario del Poder Judicial que reconoció no saber un "pito" de la materia a su cargo. Además, la parte más débil se va a sentir totalmente indefensa y encima estará obligada a hacerse presente en un lugar en el que no se siente defendida, pero donde tendrá que quedarse.

Creo que todos los legisladores que estamos en este recinto compartimos la idea de modernizar, agilizar y hacer más eficiente el funcionamiento de la Justicia del trabajo. No entendemos por qué este tema de la conciliación como instancia obligatoria no es igual que en la mediación. Ello nos hace pensar que el mecanismo de la mediación obligatoria en materia civil fue una suerte de cortina de humo para esconder la verdadera intención, que era establecer también la conciliación obligatoria en el ámbito laboral. Nos vendieron la mediación civil obligatoria para acostumbrarnos al concepto, pero de lo que se estaba hablando en todo caso era de que se venía un proyecto de ley en materia de protección, entre comillas, de los trabajadores, que los iba a obligar a esto que es algo parecido pero mucho más perverso: la conciliación en materia laboral.

Tampoco entendemos por qué no se establece la obligación de que el trabajador sea asistido por un letrado que lo ayude y defienda y que, cuando aquél no lo pueda solventar —que sin duda será en el 90 por ciento de los casos— el Estado se haga cargo de dicho costo. Me refiero a alguien que defienda los intereses del trabajador, porque la otra parte va a tener una doble defensa: su propio abogado y el conciliador, que me aventuro a decir será el más interesado en defender los intereses del empresario.

No puedo imaginar —no sé si alguien podrá hacerlo— a los estudios serios o a los abogados de nota en materia laboral inscribiéndose como mediadores en el registro que se instituya. Más bien imagino que se anotarán los "chantas", aquellos que mientras estarán firmando con una mano el acta del acuerdo, con la otra van a estar esperando debajo de la mesa recibir los sobres, que no sólo constituirán un hito más en el proceso de degradación de la Justicia sino —por sobre todas las cosas— un escalón más en el proceso de degradación de los trabajadores de la República Argentina. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Molinas. — Señor presidente: deseo fundamentar nuestra posición de rechazo total del

proyecto en consideración. Del mismo modo que lo expresamos al debatir la anterior iniciativa, queremos señalar que existe una contradicción evidente en las palabras.

Se supone que un proyecto sobre conciliación debería buscar un acuerdo, pero se fija la obligatoriedad, con lo cual se crea una nueva instancia para quien reclama la reparación de un derecho. No sé si en el fondo todo esto no está insinuando la privatización de la Justicia, que es lo único que queda sin privatizar en este momento. Afirmando esto porque se sustrae a los trabajadores de sus jueces naturales, para someterlos a la voluntad de un burócrata del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo que no ofrece garantía alguna.

Es conocida mi posición contraria a la forma en que marcha la Justicia en este país, pero a pesar de ello prefiero que la decisión de las contiendas judiciales esté a cargo de un magistrado que debe reunir determinadas condiciones y tener ciertas responsabilidades, y no del burócrata de turno designado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o de aquellos que van a constituir la nueva burocracia del sistema de trabajo de los mediadores en materia civil y comercial.

Hemos visto cómo día a día se ha ido degradando el derecho de los trabajadores, cómo se han ido eliminando las conquistas que la clase obrera adquirió a lo largo de una difícil, cruenta y a veces sangrienta lucha por asegurar sus derechos; todo eso se arroja hoy a las fauces de esta nueva diosa fortuna que es la empresa privada.

También es una superchería creer que esto implica disminuir los costos, porque el costo laboral es mínimo en cualquier empresa frente a lo que cuesta el crédito de la usura en las condiciones que hoy se dan. No hay más que tomarse el trabajo de leer cualquier balance de empresa para advertir que el costo del trabajo —el sueldo y las cargas sociales— es ínfimo ante lo que significan la usura y los préstamos a los intereses que hoy se toman.

Pensamos que esto importa una nueva degradación. Poco a poco hemos visto caer —y lo lamentamos profundamente— cada una de las conquistas conseguidas por la clase obrera. Flexibilizamos el trabajo; ya el horario de la jornada laboral lo fija el patrón; incluso las vacaciones pueden coincidir o no con las de la esposa del trabajador que también tiene una ocupación. Hasta las vacaciones de los chicos hoy se manejan con un criterio tendiente a fomentar el turismo, y se llega al extremo de que las fiestas nacionales, que constituyen la

esencia de nuestro país, como el Día de la Bandera, se celebren en un día distinto para que las empresas de turismo o la gente con posibilidad de viajar lo utilicen para vacacionar.

Hemos visto caer la ley de accidentes de trabajo, que ahora importa un castigo al sector laborativo porque el obrero que se accidenta no tiene derecho a la reparación integral del daño sufrido sino que tiene que someterse a la autoridad administrativa, aunque es de hacer notar que si el mismo hecho produce la muerte de personas que no tienen relación laboral con el empleador, los afectados sí tienen aquel derecho. Me pregunto si con esta degradación que estamos haciendo del derecho del trabajo poco a poco no terminaremos declarando un día que trabajar es un delito y que quien lo haga estará infringiendo la ley y debe ser sancionado.

Entendemos que el trabajo dignifica y que el obrero tiene que ser protegido frente al Estado y el patrón, que si bien atraviesan un momento difícil, están en una situación diferente.

No insistiré con los argumentos que han vertido los señores diputados Flores y Alcides López, con los que coincido. Pero entiendo que, en lugar de acelerar los pleitos, esta iniciativa los demorará, porque el obrero que no transe, que no se someta a la exigencia del burócrata de turno del Ministerio de Trabajo, tendrá que aguantar setenta días, que en realidad serán muchos más teniendo en cuenta que los plazos se cuentan por días hábiles. Además, quien inicie un reclamo un 1º de octubre, tendrá que dejar pasar los días de la feria judicial para poder continuar las actuaciones.

Sr. Castillo (J. L.). — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Molinas. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Romero C. A.). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). — Señor presidente: con el debido respeto a la personalidad del señor diputado Molinas y a su edad, quisiera que me aclare en qué parte del proyecto de ley en consideración se alude a setenta días de duración del plazo de conciliación.

Sr. Presidente (Romero C. A.). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Molinas. — Señor presidente: se ha fijado un plazo de diez días para la designación del

conciliador y después se crea un trámite que en conjunto insume esa cantidad de días, como en el caso de la mediación.

De todos modos agradezco las expresiones del señor diputado Castillo; la edad tiene algunas ventajas de vez en cuando.

Insisto en que este proyecto termina con lo poco que queda del sistema laboral. No sé si ha llegado la oportunidad de que el Congreso Nacional designe una comisión bicameral para reelaborar el derecho del trabajo, empezando por la "ley de la silla", de Alfredo Palacios, hasta terminar con las últimas conquistas de las que durante mucho tiempo se jactaron los que hoy ejercen el poder.

Quiero dejar constancia de esto que expreso, porque cuando en el futuro se analice lo que pasó durante este período, por respeto a mis hijos no quiero que mi nombre figure en esta degradación del derecho del trabajo, donde reitero que lo único que falta es que declaremos que el trabajo es un delito y que quien lo hace está violando la ley. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Romero C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Rico. — Señor presidente: seguimos en la hora de la emergencia porque tanto el proyecto en consideración como el tratado anteriormente, así como el de flexibilización laboral y el que vamos a considerar mañana referido a concursos y quiebras, forman parte de esta tremenda emergencia económica que vive la República como consecuencia de la ejecución del modelo de transferencia y desnacionalización que conduce este gobierno, modelo que avanza sobre los efectos pero nunca opera sobre los problemas que está creando la desocupación actual.

Según se expresa en los fundamentos que acompañan al proyecto en tratamiento, se crea esta instancia de modo que se aligere notablemente el caudal de litigios ante la Justicia nacional del trabajo, cuya cantidad —al parecer— en el corriente año ha superado la estructura judicial. Ello significa que se está creando un sistema paralelo para solucionar los problemas que no puede remediar la estructura judicial, la que debería funcionar como corresponde. Ante ello nos preguntamos qué se inventará cuando los reclamos ante el Servicio de Conciliación también superen su estructura, porque la conciliación no solucionará los conflictos que originan los litigios laborales; de modo que éstos se incrementarán hasta el infinito colmando la capacidad conciliatoria que hoy se quiere inventar.

La conciliación no superará la falta de producción a la que induce el modelo económico ni la

falta de política de empleo, por lo cual la desocupación continuará aumentando y con ello los litigios, pero con el agravante de que las empresas que cierren no tendrán recursos ni siquiera para conciliar en situaciones ventajosas. ¿Acaso el conciliador podrá levantar las persianas de las fábricas?

Ni este proyecto ni la ley de flexibilización laboral son los instrumentos idóneos para terminar con el desempleo, cuyo aniquilamiento prometió el señor presidente de la Nación; sólo sirven para apuntalar la teoría del equilibrio de caja que maneja el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

¿Por qué no instituyen un conciliador entre los intereses de la banca externa acreedora y los trabajadores argentinos? En este caso sería interesante introducir la figura del conciliador.

Podríamos discutir si la instancia que se pretende crear debe ser o no obligatoria, o si el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se subordina a los dictados del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, porque pareciera ser que ha dejado de cumplir con su histórica función de preservar los derechos de los trabajadores. También podríamos debatir acerca de si se pretende abaratar el costo argentino en desempleo de los salarios —ya caídos— de los trabajadores, o si —como en las últimas sesiones— nos encontramos ante la privatización de la Justicia. Entendemos que esa discusión es estéril, porque este proyecto está desfasado en tiempo y espacio. Su debate se tendría que haber dado cuando todavía estaba en condiciones de producir algún efecto benéfico, es decir, hace diez o quince años —en todo caso, antes de 1976—, cuando teníamos aparato productivo y trabajadores. Hoy no contamos con aparato productivo y tenemos un alto desempleo; por lo tanto, esta discusión es inútil.

El equilibrio entre la antinomía trabajador-empresario que se pretende solucionar con la conciliación debió haberse establecido en el momento adecuado; hoy no tiene sentido porque no existe el trabajador, y el empresario pronto dejará de existir en virtud del proyecto de ley que se va a considerar mañana.

Por las razones expuestas considero que resulta indiferente votar afirmativo o negativamente el proyecto en discusión, porque no hay actores entre los cuales mediar. Es probable que durante un breve período beneficie a algunos empresarios abaratando los costos de los juicios, o que algunos obreros perciban algo antes de quedarse sin nada, pero este problema se solu-

ciona sólo si hay producción, por lo cual la iniciativa en consideración resulta absolutamente inútil.

De todos modos adelanto el voto negativo del bloque que represento, porque entendemos que la instancia conciliatoria laboral no debe ser obligatoria ya que la parte empresarial podrá ofrecer pagar sumas irrisorias muy por debajo de la deuda real, con el agravante de que los acuerdos alcanzados en la instancia de conciliación están exentos del impuesto y de los aportes de los trabajadores con destino al régimen de seguridad social.

Vamos a votar negativamente este proyecto de ley porque cierra todo el contexto jurídico donde se consolida el régimen de transferencia del patrimonio argentino al extranjero y el modelo de dependencia.

Sr. Presidente (Romero C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Señor presidente: voy a intervenir brevemente sólo para opinar sobre algunas expresiones que se han vertido en este debate.

Desde ya agradezco las palabras muy generosas que me dedicó mi dilecto colega, el señor diputado José Luis Castillo.

Debo decir que ha ocurrido lo que vaticiné: por anunciar horas de votación nos encontramos con que sólo hay veinticinco señores diputados en sus bancas en este momento.

Me parece que una fórmula ideada por el legislador para obtener resultados de una instancia de conciliación en el ámbito laboral puede merecer objeciones. De todas esas dudas me hice cargo cuando presenté a la Cámara el informe sobre el proyecto de ley de mediación en el ámbito civil y comercial. En aquella oportunidad dije que el proyecto de ley votado era experimental. Hay leyes que tienen ese carácter y son ensayos, porque habrá que ver cómo funciona la institución teniendo en cuenta la formación de las personas que intervienen y la dedicación que ponen.

A veces copiamos modelos que han sido perfectos en otros países del mundo. La ley de transferencia de fondos de comercio es un ejemplo clásico en la materia. Entonces, nos preguntamos cómo es posible que leyes tan perfectas no lo sean en nuestro medio. Esto acontece a veces porque la mala fe está muy difundida a la hora de la aplicación de los preceptos normativos que en otros lugares no dan motivo ni razón para que se abuse de esas normas a fin de

conseguir su anulación o de neutralizarlas. Todas estas vacilaciones del legislador son aceptables.

Recuerdo la época en la que obtuve mi título universitario, cuando funcionaban —en la entonces calle Cangallo 2455, recuerdo hasta el número— las vocalías de conciliación obligatoria en sede del fuero del Trabajo. También me acuerdo de que esta instancia producía una mala impresión: aparecía un funcionario, después de largas horas de espera, y preguntaba si había arreglo o no. En esto consistía una diligencia que no traía ningún beneficio al procedimiento. Si vamos a pensar que con este modelo va a ocurrir lo mismo, comprendo perfectamente bien las dudas que plantean los señores legisladores. Pero tenemos que pensar seriamente que a muchos habrá de beneficiar esta instancia si no ocurren deformaciones y desviaciones, porque si ocurren, por supuesto que toda ley puede ser tildada de ingenua por no haberlas previsto.

Lo cierto es que el trabajador que hoy tiene que enfrentar un juicio, no sólo en Buenos Aires sino también en muchos lugares del país, debe transitar un verdadero calvario. Las audiencias se fijan muchas veces sin tener en cuenta la necesidad de quien demanda por un despido o por un accidente laboral, toda vez que los jueces que quieren trabajar con seriedad entienden que no pueden acumular en un mismo día una determinada cantidad de audiencias, difiriendo en consecuencia en su agenda la celebración de estos actos procesales, hasta introducir a los litigantes —con beneficios evidentes para la empresa— en un trámite sin solución de continuidad, pudiendo llevar años la resolución de un simple problema. Esto ocurre en la actualidad.

De todo esto se ha informado a la Comisión de Justicia con la presencia de caracterizados representantes de todos los ámbitos. En este sentido nos visitaron abogados que actúan por ante la Justicia laboral y jueces del fuero, que si bien es cierto desestimaron el aspecto relacionado con el cúmulo de tareas, también lo es que no manifestaron oposición, por las razones que han brindado en esta Cámara algunos señores diputados. Se dijo, por ejemplo, que está disminuyendo la tarea en los tribunales del trabajo y que, por consiguiente, la mediación podría ser afrontada perfectamente por los jueces. Esto lo digo sin perjuicio de recordar que muchos magistrados se presentaron en el Ministerio de Justicia reclamando por el cúmulo de tareas que tienen. Habrá que ver en definitiva cuál

es la realidad o el interés que legítimamente traen al Congreso a la hora de ser consultados para la sanción de una ley, sin que esto signifique reproche alguno.

Hay que animarse con la mediación, por cuanto ella ha funcionado muy bien en otros países del mundo. Será una alternativa, no la seguridad, por las razones que he expuesto anteriormente. Será una posibilidad más para el trabajador que, ante la inactividad que le puede significar un despido o un accidente, necesita de fondos para afrontar las necesidades de la vida, sin que esto le demande tres o cuatro años de pleito en los tribunales.

La instancia de la mediación es obligatoria, pero no forzada. Si el trabajador se cree con mejores derechos no tiene por qué aceptar. Lo que fundamentalmente quiero decir es que me niego a pensar que el cuadro sea tan doloroso como lo han pintado algunos señores diputados, porque si fuera tal, si les asistiera razón, ninguna norma, disposición o ley que sancione este Congreso podría tener éxito en el panorama institucional argentino.

No es cierto que la mediación civil y comercial se haya trabajado, estudiado y analizado como pantalla o cortina de humo para la conciliación obligatoria en sede laboral. Este es realmente un cargo injusto, que proviene de un señor diputado a quien respeto, como a todos los señores diputados, y a quien considero —me refiero al señor diputado Flores— porque lo veo siempre dedicado, preocupado y volcando toda su actividad en el trabajo en la Cámara. No puede decir lo que ha señalado sobre el tema de la mediación, cuestión sobre la que también planteé mis dudas a la Honorable Cámara; pero es un tema que se estudió, se analizó, se investigó e incluso se hizo consulta en cuanto a sus efectos en otros países donde se ha puesto en práctica. Esa misma consulta también estuvo referida a algunos organismos judiciales y se realizó antes de la consideración de este proyecto de ley.

Hemos tenido oportunidad, antes en el Senado y ahora aquí, de escuchar esas experiencias y dijimos que la norma no solamente tendía a instaurar un beneficio que podría alcanzarse para su buen funcionamiento, dando oportunidad a mucha gente a librarse del flagelo del pleito, sino que también respondía a la declaración de impotencia de un Estado que durante décadas fue asignando equivocadamente los recursos, sobre todo los destinados a la Justicia o a la educación. Y ahora tiene que recurrir a este expediente de la mediación ante el

atraso que tiene la Justicia en materia tecnológica y en materia edilicia, lo que hace necesario también descomprimir el trabajo de los tribunales.

Ahora se exalta —lo oímos en todas partes— y se habla de la salud, de la educación y de la Justicia como los fines primordiales del Estado; y cuando lo decíamos desde la UCEDE hace muchísimos años, se nos oponía el Estado benefactor, el Estado distribuidor y dueño de todas las cosas. Se nos acusaba de querer instaurar un Estado raquítico y flaco, que sólo se ocupara de la salud, de la justicia y de la educación.

Ahora advertimos las consecuencias de haber desoido durante décadas en la Argentina las sanas prácticas de la administración. También hoy tenemos que reconocer que un trabajador que concurre a los tribunales en este mes de julio, va a recibir como fecha tentativa de audiencia el 3 de diciembre del año próximo.

Aclaro que no dejo de lado a aquellos jueces que, al ser verdaderos héroes en su trabajo, se preocupan de fijar fechas más correctas, pero lo hacen a costa de un trabajo superlativo que no se puede pretender al común de los agentes judiciales.

Quiero decir que hemos asignado mal los recursos. Aquí votamos una ley de antarquía del Poder Judicial y el recurso principal que le deparamos fue el 3,5 por ciento de los ingresos tributarios y no tributarios.

El ministro de Economía interpretó que el Congreso podría disponer del 3,5 del 44 por ciento, que es la parte de la Nación, y que no podía tocar la parte correspondiente a las provincias. La realidad es que el Congreso puede disponer del ciento por ciento de los recursos; en las provincias funcionan los juzgados federales y esas mismas provincias recurren a la Cámara de Diputados para que votemos su instalación. Así le fueron serruchados a la Justicia más de la mitad de los recursos votados por el Congreso.

Por otra parte, sería bueno que hubiese adelantos tecnológicos y más edificios, cosa que no ocurre. En realidad aún siguen funcionando muchos juzgados con métodos del siglo pasado.

Este mecanismo que se instaura pretende resolver de manera más plausible esta cuestión, otorgando por lo menos una instancia tal que, si hay un acuerdo, concluye el expediente para terminar con ese martirio que significa llevar una vida asociada a un pleito.

Esto es lo que se pretende en la buena fe del legislador; si vamos a suponer que el mediador, un argentino que tiene un título o que tiene una

capacidad, que quiere dedicarse a una tarea noble y que quiere especializarse, va a terminar siendo un socio de la empresa, de la que espera recibir un sobre, me parece que con ese criterio tendríamos que decir también que el secretario del Juzgado hace lo mismo, que el juez se asocia a quien le pueda dar un sobre, al igual que podría ocurrir con los diputados y los senadores; en definitiva, que el poder en general está haciendo lo mismo, pues es allí donde se dan en mayor medida estos vicios.

No tenemos ningún derecho a estar suponiendo que las personas que van a dedicarse a un trabajo lícito y honrado vayan a tener ese papel que se les está adjudicando en este debate. Si es así, cerremos el Congreso porque todas las normas que dictemos van a caer en manos de personas que van a estar esperando un sobre para no cumplir con lo que dicen las leyes. No podemos seguir desmoralizando al país desde estas bancas. No nos olvidemos de que la sospecha del pueblo recae sobre la clase política. Entonces debemos tener mucho cuidado al hacer esa descripción de lo que va a pasar en estos tribunales.

Por ello, sin incurrir en ningún tipo de personalización —no es mi costumbre hacerlo y debo decir que es un método que desprecio—, tengo que señalar que rechazo fuertemente esas expresiones que ponen en duda la capacidad, la rectitud y el impulso creador de nuestro pueblo.

Estoy sentado en esta banca porque creo que el pueblo argentino es lo suficientemente grande para alzarse sobre los momentos de crisis y tratar de poner su empeño para superar estos problemas de división, estos problemas de enfrentamientos que, si existen, es porque muchas veces son promovidos desde el propio poder que dice desconfiar del modo en que se habrán de cumplir las leyes.

Comparto el escepticismo, la duda o como quiera llamársele, porque creo que en nuestro país existen problemas —para denominarlos de alguna manera— de administración. En este sentido a veces hay buenas normas que no logran el resultado esperado por la forma en que se las quiere llevar a la práctica.

Veamos lo que pasa en el sistema judicial con la ejecución de sentencias; en las cárceles, el espectáculo de atraso incommensurable que ofrece el país. Todo esto no quiere decir que no podamos adoptar mecanismos como éstos, que llevan mucha tranquilidad a personas que a lo mejor pretenden salirse de un trámite interminable, y de esta manera poner punto final a una situación laboral que terminó de una manera no deseada.

He analizado en estos días los costos laborales en otros países; he visto cómo se redujeron, para promover más fuentes de trabajo. Nosotros tendríamos que hacer mucho más que reducir esas posibilidades si quisiéramos imitar a estos países del mundo que tienen una proporción de desempleo mucho menor a la nuestra.

Debemos analizar estos hechos como lo hicimos al tratar la ley de accidentes de trabajo. Es importante que la contingencia del accidente no destruya lo permanente que es la fuente de trabajo. No dramatizamos las circunstancias que trae aparejada esta norma. El trabajador que concurre lo hará también con su criterio propio, que es avanzado y formado en nuestra época; va a ir con su propio letrado; se va a encontrar con un mediador independiente, porque así lo establece el proyecto que estamos propiciando, va a tener la voluntad y la libertad de aceptar o no, cumpliendo esa instancia; después va a contar con un juez de la República y también con una Cámara de Apelaciones que revisará lo que dice ese juez; podrá recurrir a todas las instancias, pero si toda esa gente que ponemos como custodia de los derechos de las personas estará recibiendo sobres, nuestro trabajo legislativo caerá en forma masiva.

Para concluir y cumplir con lo que dije en cuanto a que sería breve, quiero señalar que éstas son las razones que promovieron mi apoyo a este proyecto. Con los mismos fundamentos por los que voté el proyecto de ley anterior, votaré el que está en consideración.

Como legislador —esto lo señalé con motivo de la ley de autarquía judicial— pienso que puede haber circunstancias o argumentos que malogren la tarea de quien legisla, pero voto con la convicción de que puede ocurrir que esta ley experimental tenga éxito y lleve un poco más de tranquilidad y bienestar a los que tienen que afrontar los efectos de contingencias no queridas en la relación laboral.

En definitiva, un mediador está cumpliendo con lo que tanto se ha predicado a lo largo del siglo desde la encíclica *Rerum novarum*: acercar el capital y el trabajo. Ambos elementos deben ser reunidos y no puestos en un antagonismo estéril e inservible.

Sr. Presidente (Romero C. A.).— Tiene la palabra la señora diputada por Salta.

Sra. Maidana.— Señor presidente: en nombre del Grupo Provincial, adelanto nuestro voto negativo para el proyecto en consideración.

Pese a la versación y a la enjundia puestas por el señor diputado Durañona y Vedia, su discurso no ha llegado a conmoverme. Quizás

ello sea así porque tengo sobre mis espaldas veinticinco años como magistrada y más de diez años en el ejercicio de la profesión. En este último caso, como abogada, la mayor parte del tiempo la pasé atendiendo litigios judiciales, y como magistrada me desempeñé durante más de diez años en la Justicia laboral.

Soy partidaria de la conciliación, pero no de la conciliación obligatoria. Como juez y como abogada he practicado la conciliación en múltiples oportunidades, pero conozco también los efectos y resultados de la conciliación obligatoria.

Sostenemos que, tal como la preconiza este proyecto, la conciliación obligatoria atenta contra el derecho que tiene el trabajador de acceder a la Justicia dentro del más breve plazo posible. Su reclamo debe hacerse en tiempo apropiado y por la vía más efectiva posible. Ello es así porque se trata de un crédito de naturaleza alimentaria.

Con ese crédito el reclamante debe satisfacer sus propias necesidades y las de su familia. Tiene que alimentar a su núcleo familiar, tiene que vestir a sus hijos y mandarlos a la escuela; y aquí debo parar la enumeración, porque si nos atenemos a los sueldos de los trabajadores, no alcanzan para más.

Entonces, si para acceder al pago de esos rubros tiene que someterse a la instancia administrativa obligatoria que comenzará con la demanda de conciliación y que va a continuar con la designación por sorteo de un conciliador a quien habrá que notificar, quien no podrá ser objeto de recusación por las partes y quien, además, no deberá excusarse, la duración del proceso todavía será mayor. Si el conciliador rechazase la recusación, estaríamos frente a un incidente que debería resolver el Ministerio.

Entonces, no hay duda de que el trámite se alarga notablemente. Hasta podría ocurrir que la autoridad administrativa rechace el acuerdo y fije al conciliador un nuevo plazo para que cumpla su cometido, que consistiría en intentar una nueva conciliación. Estoy enunciando sólo algunos pasos del trámite implementado por el proyecto.

Resulta fácil advertir que este procedimiento no durará dos o tres meses. Si no hay conciliación, prácticamente se prolongará más de seis meses. En consecuencia, los juicios no van a durar entre tres y cinco años —como decía el señor diputado José Luis Castillo—, sino que se prolongarán desde tres años y medio a cinco años y medio.

Si el estado de la economía del país es, como el actual, la convocatoria a estas audien-

cias recaerá en el pequeño y mediano empleador, ya que generalmente la gran empresa tiene otras posibilidades para arreglar sus problemas. Entonces, al fracasar la instancia de conciliación, el reclamante recién en esa oportunidad podrá acudir a la vía judicial. Se perderá un tiempo precioso, porque luego de los seis meses el trabajador estará más necesitado y el empleador quizás tenga menos posibilidades de pagar.

Me pregunto a qué apuntan estas innovaciones que no acercan beneficios a las partes. Al trabajador se le obstaculiza llegar a la justicia, que es la vía más efectiva, aunque la más prolongada. Tampoco se beneficia al empleador, ya que, si no está en condiciones de cumplir con los rubros que adeuda en un primer momento, difícilmente cambie su situación posteriormente. A su vez, el sistema no es útil para el Estado, ya que se crea un nuevo organismo, independiente del conciliador; para poder entrar en funcionamiento, dicho organismo requerirá recursos que tendrán que ser financiados por la comunidad mediante el pago de impuestos.

La conciliación obligatoria no ha tenido éxito en los lugares en que rigió. La situación que conozco mejor es la de Salta, donde no dio resultados, pese a que estaba implementada dentro de la vía judicial. Se trataba de un trámite que comenzaba con la demanda ante un juez de conciliación, quien inmediatamente debía citar al empleador a fin de que concurriera con su apoderado. Si la conciliación fracasaba, estaba obligado a contestar la demanda, por lo que no existía una pérdida de tiempo de seis meses. En la misma ocasión en que asistía a la primera audiencia, podía conciliar o contestar.

Ese procedimiento estuvo vigente por más de diez años, pero debió modificarse porque las conciliaciones no se formalizaban en todos los casos; fue reemplazado por el procedimiento actual, que deja abierta la instancia conciliatoria en cualquier etapa: se puede conciliar al contestar la demanda, al ofrecer la prueba, al ser citado para la producción de la prueba y aun en la segunda instancia.

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe dejar aclarado que los organismos administrativos que controlan y la policía del trabajo de las provincias, desde su creación cuentan con una oficina establecida para la conciliación voluntaria, generalmente a cargo de un abogado, quien además de las otras tareas que cumple puede realizar la conciliación. Lo mismo ocurre en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ante

cuya Subsecretaría de Relaciones Laborales —también a cargo de un abogado— tiene lugar la conciliación.

Por lo que conozco no podría afirmarse que esa, conciliación, que tiene calidad de voluntaria, ha fracasado terminantemente como para que sea necesario crear un procedimiento pesado a cargo de un organismo específico y de un conciliador a quien se le debe abonar por separado; o sea que no puede decirse que se está bajando el costo laboral, porque de acuerdo con el artículo 13 del proyecto de ley los honorarios estarán a cargo del empleador y éste puede tener que responder por un recargo en sede judicial si el juez estimare que en la etapa conciliatoria se obró abusivamente.

He leído el proyecto de ley en tratamiento con la misma buena voluntad con que he estudiado el de mediación, buscando por todos los medios la parte positiva a fin de poder pronunciarme en sentido afirmativo. Sin embargo, el trabajador hoy está cargado de angustia. Si trabaja, no sabe cuánto tiempo más va a durar su fuente de ingresos; si es objeto de un conflicto porque no se le ha abonado lo que corresponde o porque es dejado cesante, o debe reclamar por alguna otra cuestión, sostengo que no hay que agravar su situación postergándole la posibilidad de hallar un camino que le garantice la solución efectiva y adecuada a su problema.

Hagámonos eco alguna vez de la experiencia que brindan las provincias —el interior del país también puede enseñarnos algo— y no tengamos en cuenta sólo el derecho extranjero. En todo caso ofrezcamos la conciliación en la primera etapa del proceso judicial y establezcamos que los jueces laborales que de aquí en más sean designados en la justicia laboral cuenten con un título que les acredite que han efectuado un curso de mediación y de conciliación; que este recaudo sea un requisito para su designación y que también lo sea en el futuro, cuando la designación se efectúe con intervención del Consejo de la Magistratura, priorizándose el derecho de ese abogado a ocupar un cargo en la magistratura laboral. Creo que hasta podría pensarse que ese título que acredita su aptitud para la conciliación puede ser objeto de un incremento de sueldo, pero es preferible no crear otros organismos que, como ya se ha dicho, no han dado resultado en otros fueros. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Romero C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Novau. — Señor presidente: en homenaje a la memoria de los luchadores por los derechos de los trabajadores: los mártires de Chicago, los perseguidos, los encarcelados y los muertos en esas viejas luchas que se desarrollaron a fines del siglo pasado y durante el actual, con sus secuelas de innumerables víctimas, pero también de respuestas de los poderes públicos —quedaron inscriptos los nombres de importantes figuras que hoy veneramos por su sensibilidad social y por su defensa del sector más oprimido de la sociedad: Alfredo Palacios, Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón, Crisólogo Larralde, etcétera—, y observando el escenario en el que se está desarrollando este debate, le solicito que accione el mecanismo para llamar a los señores diputados.

No es posible que un tema de esta importancia, que puede cambiar el rumbo de la política laboral argentina se esté debatiendo en soledad, con treinta o cuarenta diputados presentes. Este parece un diálogo de sordos. Hemos escuchado brillantes exposiciones a favor y en contra de esta iniciativa, todas dignas de ser atendidas y analizadas para evaluar en el momento de adoptar decisiones que modificarán el rumbo de ciertos aspectos del procedimiento laboral en la Argentina.

Todo lo que se ha expresado hasta el momento es válido y digno de ser tenido en cuenta, y surgirá en el debate en particular cuando debamos desmenuzar artículo por artículo. Más allá de nuestra discrepancia total, en la consideración en particular la bancada radical intentará mejorar el proyecto para que no se causen males mayores a los trabajadores argentinos. Porque este es el único lugar donde podemos exponer con amplitud y libertad, dado que en el ámbito adecuado, la Comisión de Legislación del Trabajo, no nos dieron oportunidad de hacerlo.

Parciera que esa comisión está esclerosada porque funciona cuando le conviene al oficialismo, pero la mayoría de las veces permanece cerrada o nos espera con despachos ya elaborados para ser firmados, sin otro remedio para quienes nos oponemos que firmar una disidencia total o parcial o elaborar algún proyecto alternativo que por supuesto nunca se tiene en cuenta al considerarse el asunto en el recinto.

Hemos pedido que en la Comisión de Legislación del Trabajo se escuche a los actores sociales. Estamos cambiando el procedimiento laboral. Debió oírse la opinión de los abogados laboristas y de los hombres de la Justicia; de viejos funcionarios experimentados del Ministe-

rio de Trabajo, aquellos que son de carrera, que han tenido muchas vivencias en materia de conciliación de conflictos laborales, muchos de los cuales se han producido en los últimos años.

No nos tuvieron en cuenta. Nuestra propuesta alternativa tampoco fue escuchada. Hoy concurrirnos a este recinto para discutir esta iniciativa y señalar cuestiones que me parecen elementales. Lo dije en alguna oportunidad y lo reitero. Se ha desgranado un plan con mucha inteligencia y sagacidad, porque desde hace tres años aproximadamente estamos discutiendo la flexibilización laboral como modo de generar empleo en algunos casos o como forma de mejorar la rentabilidad de las empresas en otros, pretendiendo solucionar así el estado de crisis que se vive y sostener el ya insostenible plan de convertibilidad.

Muchos fueron los intentos. Se elaboraron proyectos que incluso fueron reiterados por el propio Poder Ejecutivo. Pero no puedo dejar de señalar la inteligencia con la que luego se emprendió la última etapa, cuando comenzó a tener efectos positivos el programa económico: el plan para terminar con toda la legislación laboral argentina, con el derecho protectorio del trabajador.

De esa forma, con esa metodología cuestionable, se fueron sancionando todos los proyectos de ley que han tenido esa finalidad, porque hoy estamos considerando uno de ellos, por el que se crea una nueva instancia mal llamada de conciliación obligatoria que se ha promocionado como la que logrará terminar con el alto índice de litigiosidad que soporta el fuero laboral.

Ya se ha dicho —no voy a reiterar conceptos vertidos por otros legisladores— lo que esto significa y dónde están los verdaderos problemas de la litigiosidad y sus soluciones. Pero esto no va a resolver los inconvenientes que se plantean, porque la mayoría de las normas que se están generando y que son aprobadas por el oficialismo a pesar del voto negativo de la oposición son tan confusas y engorrosas que crearán mayores conflictos, porque para su interpretación las partes tendrán que recurrir a la Justicia para que las esclarezca y dictamine, lo cual hará que aumente la cantidad de litigios sobre los que deberá expedirse.

También se dice que mediante este proyecto bajarán los costos, pero, por el contrario, considero que esta instancia acarreará más gastos para el empleador.

El proyecto de ley no es claro; además varias cuestiones quedan libradas a una reglamentación cuya equidad y equilibrio nadie garantiza, ya

que seguramente estará dominada por la necesidad de solucionar ciertos problemas económicos que está viviendo el país.

La iniciativa en tratamiento lo único que logra es generar un nuevo gran negocio, como muchos de los que nacieron gracias a esta política de desguace del Estado a través de la privatización de sus empresas y, ahora mediante el desguace de la justicia laboral argentina.

Como consecuencia del presente proyecto de ley aparece el negocio del conciliador, figura de la que no queda en claro cómo va a funcionar, cómo será designado ni tampoco de qué manera se implementará el sistema de sorteo. Lo explicitado en el proyecto en torno de esta figura es tan engorroso que me lleva a compartir las apreciaciones que anteriormente se hicieron acerca del manto de sospecha que recae sobre el funcionamiento y comportamiento de quienes vayan a ser conciliadores. Es cierto que no debe dudarse de alguien hasta que no da motivos para ello, pero en torno de este tema es la Justicia la única que garantiza ecuanimidad.

Por otra parte, los conciliadores serán designados —no sé cómo— por un servicio de conciliación que actuará en el ámbito del Ministerio de Justicia y que estará también bajo el control del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a pesar de que en la práctica será difícil compatibilizar esta cuestión entre ambos ministerios. Además actuarán en un terreno que no queda perfectamente delimitado, aunque resulta claro que no será dentro del ámbito de la Justicia porque no estarán bajo su control ni las designaciones de los conciliadores seguirán el procedimiento que se utiliza para nombrar a los señores jueces o secretarios, es decir, a través de mecanismos constitucionales que nos garanticen la ecuanimidad que debe tener quien es juez de la Nación y debe velar por los derechos, deberes y garantías de los ciudadanos.

En torno al tema de las designaciones se va a dar una situación muy especial, porque van a aparecer los hijos y entenados. Además, puedo adelantar que aún cuando recién estamos considerando el proyecto ya se están anotando en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social los futuros conciliadores, quienes están buscando recomendaciones a fin de ser tenidos en cuenta. Suponemos que en ese carácter actuarán abogados "amigos del comisario" que se desempeñarán en estudios jurídicos, ámbitos totalmente inicios y peligrosos para el funcionamiento de una instancia de esta naturaleza, que nunca debería salir de la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ni de la Justicia. Lamentablemente,

estamos asistiendo a la privatización de la Justicia laboral argentina, porque aquí se crea una instancia que está al margen de la esfera judicial, con el agravante de que las condiciones que se establecen impiden el acceso a esa Justicia, y al impedirlo se va a dar el verdadero objetivo de este tipo de legislación que se quiere imponer: acobardar o cansar al trabajador, quien va a terminar arreglando con un mediador en cualquier estudio jurídico y no va a llegar a las instancias judiciales.

Sr. Pichetto. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Novau. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: no iba a intervenir en este debate pero las afirmaciones de los señores diputados preopinantes me obligan a hacerlo, porque —lo digo con todo respeto— distorsionan la intención y el espíritu de este proyecto de ley.

El señor diputado Flores dijo que los trabajadores iban a estar sin patrocinio letrado. También sostuvo que iba a ser muy barato para el empleador este sistema. La norma obliga a asistir con patrocinio letrado o con representación de la organización sindical, que, como todos saben, cuenta con abogados. O sea que de ninguna manera en el acto de la conciliación existe desamparo legal para el trabajador.

Por otro lado, el señor diputado Flores dijo que esto era barato: en cambio, el señor diputado Novau sostuvo que va a ser caro.

La señora diputada Maidana, que habló por los partidos provinciales, se refirió a la situación alimentaria grave en la que se encuentra el trabajador que recurre a la Justicia.

Quisiera que el señor diputado Novau reflexionara conmigo en cuanto a si es cierto que este sistema judicial que está en colapso garantiza los derechos de los trabajadores cuando se fijan audiencias de vista de causas para los años 1997 y 1998. ¿Dónde está la respuesta desde el punto de vista de la necesidad primaria de ese trabajador en este sistema judicial que, como dije, está en un estado de colapso?

Al considerar el proyecto de ley de mediación laboral hemos debatido fórmulas alternativas de resolución de conflictos. ¿Por qué no aplicarlas ahora para que signifiquen fórmulas de resolución rápida de cincuenta días, en la búsqueda de una respuesta a las necesidades primarias de los trabajadores que todos reconocemos que se plantean?

En este debate rico en ideas quería aportar estas reflexiones que también deben ser tenidas en cuenta, porque constituyen la verdadera intención de este proyecto de ley de conciliación laboral, tal como ocurrió con el de mediación y va a suceder luego en el debate sobre el instituto del arbitraje.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Novau. — Señor presidente: el verdadero problema se produce porque aquí no se atacan las causas sino los efectos...

Sr. Molinas. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Novau. — Si, señor diputado.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Molinas. — Señor presidente: cuando se debatió el proyecto de ley de mediación, al igual que ahora, escuchamos decir que esto era un ensayo y que íbamos a iniciar la cultura de la mediación. Y la iniciamos a palos: obligatoriamente. Volvemos a la época en la cual "la letra con sangre entra".

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Novau. — Señor presidente: voy a rogar a los señores diputados que no me soliciten más interrupciones, porque no las voy a conceder.

El error consiste en que se han atacado los efectos y no las causas de todas las dificultades que en materia de procedimiento hemos tenido, y que reconozco que son reales.

Lo fundamental es ir a la fuente del conflicto y tratar de mejorar la situación para que éste no se produzca. Por eso es importante que se pongan en funcionamiento diversos institutos y leyes que estamos debiendo a la Nación Argentina. Se requiere una legislación en materia de convenciones colectivas más moderna, que trate de democratizar las relaciones del trabajo; se necesitan leyes de información, de consulta y participación de los trabajadores. Cuando contemos con todo esto seguramente habrá muchos menos conflictos que terminan siendo llevados a los organismos administrativos del Estado y a los estrados de la Justicia.

Siguiendo con los conflictos ya originados, nada se ha hecho por mejorar, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo de la Nación; prácticamente no quedan delegaciones en el interior del

país, son simples oficinas que están sólo para contar los despidos, pero no instrumentan absolutamente nada. Lo que sí funcionan son organismos y delegaciones de ministerios provinciales, que también se han visto menguadas y que pierden día a día la capacidad de policía del trabajo y de instrumentar estas instancias.

Lo que debemos hacer es solicitar al Poder Ejecutivo que actualice o mejore estas instancias administrativas, como paso previo a la Justicia, que también debemos mejorar.

Se dijo aquí —y también lo escuché de tratadistas del derecho— que la conciliación obligatoria en el procedimiento laboral no dio buenos resultados. Mejoremos la Justicia creando la infraestructura necesaria para que pueda funcionar, pero no quitemos de su ámbito cuestiones que tienen que estar totalmente dirimidas en un foro independiente de los otros poderes de la nación.

Estamos entrando en un grave problema, como es el de la inconstitucionalidad de este proyecto de ley, porque no podemos prohibirle a un trabajador el acceso inmediato a la Justicia. Si lo hacemos violamos los principios de la Constitución Nacional, la división de poderes y el Pacto de San José de Costa Rica, recientemente incorporado a nuestra Carta Magna, con la reforma de 1994.

Estos son los puntos que deben atenderse. Pero, además, aquí se dijo que un trabajador puede recibir asistencia profesional, y en este sentido hay un punto que lo tendremos que discutir en particular; es el que se refiere a que él puede ser representado por la asociación gremial. Toda persona litigante debe ser representada solamente por un profesional. No puede una asociación gremial representar al trabajador. Lo que ella podrá hacer es presentarse con su apoderado letrado y defender al trabajador, porque ésa es su obligación profesional. De lo contrario estamos desvirtuando la filosofía real y de fondo en cuanto al verdadero rol del sindicalismo argentino. Porque de esta manera tenemos, por un lado, a empresarios con estudios jurídicos dotados de todos los elementos, el conocimiento, la capacidad y los contactos para la defensa del empleador; y por el otro lado tenemos una debilidad manifiesta del trabajador que está litigando.

Hace mucho que dijimos que debíamos invertir el orden. Empezamos a tratar la legislación laboral al revés, empezando por lo que debíamos dejar para el final. Aquí estamos legislando sobre un procedimiento que tiene impli-

cancia fundamental en la Capital Federal y no en el interior del país, que se maneja por otro tipo de procedimiento laboral.

Antes de avanzar en este tema debemos esperar que se apruebe, como lo marca la flamante Constitución Argentina, la autonomía de la Capital Federal, con tribunales propios, autónomos e independientes, instrumentándose la forma y el procedimiento, con los organismos institucionales que correspondan, para que funcione este tipo de legislación. Es por eso que nos estamos adelantando.

También es importante que avancemos con otro tipo de leyes antes de abrir una instancia nueva en materia laboral, porque si abrimos instancias de participación a través de la información, de la consulta y de otros elementos que tenemos que discutir aquí, como la de las convenciones colectivas de trabajo, creo que tendríamos esclarecido el panorama y advertiríamos lo innecesario de estar discutiendo esta cuestión, porque los conflictos los encontraremos resueltos en el marco de una legislación laboral democrática, que es a lo que debemos apuntar.

Nosotros no nos negamos a los cambios en materia de legislación, si ello es para bien del país y de la gente. Lo hemos propiciado a través de nuestros proyectos, de los discursos en este recinto y en el trabajo en las comisiones.

Somos conscientes de que debemos legislar hacia el futuro, mirando al siglo veintiuno, y modernizar las relaciones laborales. Estamos convencidos de que las debemos modificar porque son anacrónicas y responden a otras realidades. Tenemos que legislar para la crisis que estamos viviendo y para esta nueva realidad de una economía mundial globalizada.

Tenemos que terminar con las asimetrías de los distintos mercados, con esta realidad que tenemos que sufrir de un permanente *dumping* social, donde se nos están introduciendo productos elaborados con esclavitud.

Los argentinos tenemos que respetar la dignidad del trabajador, buscar elementos para bajar los costos en otras partes de la economía y no en el trabajador. Por eso es importante que digamos aquí que, más allá de todas las cuestiones tecnicistas que vamos a discutir durante el tratamiento en particular, hoy estamos asistiendo —y lo dijimos en el planteamiento de algunos pedidos de apartamiento del reglamento a una situación límite, con una crisis social tremenda, frente a lo cual solicitamos que no se sigan afectando los derechos adquiridos de los trabajadores—.

El proyecto de ley de quiebras, por ejemplo, en dos artículos arrasa con todos los derechos adquiridos de los trabajadores, inclusive con las legítimas convenciones colectivas logradas en el marco de la ley, lo que va a dar lugar a algún tipo de acción fraudulenta que terminará perjudicando al trabajador.

Lo que hay que pedir es que se establezcan medidas para terminar con la desocupación, y la única manera de acabar con ella en nuestro país es produciendo cambios en el rumbo económico.

Hay que flexibilizar el plan de convertibilidad, porque de lo contrario la situación actual va a terminar con empresas destruidas, con la desaparición de fuentes de trabajo, con obreros lanzados y expulsados del mercado laboral y con los cordones de miseria y de desocupación que tienen estos grandes bolsones de pobreza ubicados en las grandes ciudades de la República.

Esta es una preocupación no solamente de los legisladores sino también de todos; en el país comienzan a sentirse las marchas de clamor popular, se percibe en la República un ruido sordo que viene reclamando soluciones y cambios de rumbos. La Iglesia lo ha advertido hace pocos días con mucha sabiduría. Monseñor Justo Laguna decía que no podemos construir la estabilidad sobre los cadáveres. Construyamos un país de progreso y de prosperidad, pero con paz, respetando la dignidad de la gente. Para ello los legisladores tenemos que hacer honor a esa gran responsabilidad que el pueblo argentino nos ha delegado cuando nos votó como sus representantes en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasetti. — Señor presidente: éste es un debate interesante que debería ser enriquecido luego en la discusión en particular.

Debo decir que se ha partido de algunas afirmaciones que no compartimos. En este sentido alguien dijo que ésta es una ley experimental. Entendemos que no es así porque sobre la conciliación laboral se ha venido experimentando en el país desde hace mucho tiempo y con resultados poco exitosos. Esta no es una norma experimental como la mediación porque no tiene un plazo de vigencia como lo tiene el proyecto que acabamos de sancionar. En este caso existe una intencionalidad muy clara que surge del mensaje del Poder Ejecutivo que acompaña al proyecto y de las propias palabras del miembro informante de la mayoría cuando señala que tiene

por objeto facilitar la solución de los conflictos individuales del trabajo en sede administrativa y disminuir el caudal de pleitos existente en el fuero laboral.

Este objetivo fundamental de la norma ha quedado claramente demostrado en la discusión que tuvo lugar en el seno de la Comisión de Justicia, donde este proyecto se analizó en forma exhaustiva, lo que no ocurrió en la Comisión de Legislación del Trabajo. Como decía, la Comisión de Justicia recibió a camaristas laborales y a representantes de la Asociación de Abogados Laboralistas. En la reunión celebrada por esta comisión el día 23 de febrero de 1995, los doctores Morelli y Bermúdez, presidente y vicepresidente respectivamente de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, se manifestaron en contra de este proyecto. El doctor Bermúdez dijo textualmente: "Sinceramente, debo decirles que cuando llegó el proyecto a mis manos pensé que habíamos retrocedido medio siglo. Ya en el año 1945 existía un órgano de conciliación obligatoria..." Dudo de la constitucionalidad de la norma en virtud de la vigencia del Pacto de San José de Costa Rica que, como bien se dijo aquí, garantiza un procedimiento inmediato hacia la instancia judicial.

Asimismo, el doctor Bermúdez manifestó que estábamos por cometer una nueva herejía. Este camarista señaló: "Hay una paradoja en nuestro país. Un empleado del servicio doméstico en la Capital Federal tiene que ir a un tribunal administrativo porque así lo dispone la legislación; no puede acceder a los jueces directamente. Entonces cruza la General Paz y va directamente a los jueces".

Estamos legislando a nivel nacional en función de los problemas que se plantean en el fuero laboral de la Capital Federal. Modificamos las normas de procedimiento laboral en todo el país condenando nuevamente a los trabajadores del interior a una situación de total indefensión.

También señaló el doctor Bermúdez: "A lo sumo, pareciera que es una reforma parcial de la ley 18.345, como lo confiesa la parte final del proyecto. Creo que si se busca dinamizar los métodos de autocomposición de los conflictos individuales del derecho del trabajo, puede ser que la mejor manera sea actuar sobre la ley 18.345 pero no crear una instancia administrativa previa".

Por los argumentos aquí vertidos pareciera que se quiere poner al trabajador ante una opción: o concilia cobrando menos, o está condenado a pleitear durante tres o cuatro años. No se busca la justa composición de los intereses ni que el

trabajador o el empleador accedan al bien de la justicia. Lo que se procura es simplemente que haya menos pleitos en los tribunales.

Otros oradores también han señalado que el argumento de la litigiosidad no es tal.

Sr. Durañona y Vedia. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la autorización de la Presidencia?

Sr. Pernasetti. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Agradezco la deferencia del señor diputado Pernasetti.

En primer lugar deseo señalar que si el señor diputado propone, durante la discusión en particular, un límite temporal para establecer lo que se denominó el método de la mediación a fin de no ceñirnos a un plazo indeterminado, acompañaré con mi voto su propuesta.

Por otro lado quiero expresar ante la Cámara que es absolutamente exacto lo que ha dicho el señor diputado en relación con la opinión del señor juez de cámara doctor Bermúdez, quien efectivamente la vertió en el seno de la Comisión de Justicia. En esa reunión también estuvo presente el presidente de esa cámara y fue patente su esfuerzo por no asumir un compromiso porque entendía que su palabra podía ser tomada como representación del tribunal que preside. Finalmente, cuando se expidió por escrito invocando la representación de la opinión de la Cámara de Apelaciones del fuero, los criterios no fueron coincidentes con los del señor juez doctor Bermúdez, y hubo opinión generalizada de que éste había hablado, con toda convicción y seriedad, a título exclusivamente personal.

Esto no implica desconocer nada de lo que el señor diputado ha dicho antes. Es simplemente una mera aclaración.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasetti. — Señor presidente: las citas que mencioné de los doctores Morelli y Bermúdez fueron tomadas de la versión taquigráfica de la reunión de la Comisión de Justicia.

Decía que los camaristas que nos visitaron aportaron datos estadísticos. Los voy a repetir porque son interesantes, aunque algunos ya fueron anticipados por el señor diputado López.

En 1994 ingresó un total de 48.832 expedientes, de los cuales 31.310 corresponden a despidos y accidentes. En el mismo lapso se resolvió

un total de 53.411 expedientes, de los cuales 15.917 fueron conciliados, y se dictaron 30.089 sentencias firmes en primera instancia.

Aunque la situación de juicios en trámite es alarmante, ya que al 31 de diciembre de 1994 sumaban 114.812, los datos parecen demostrar que hay un equilibrio entre el ingreso y el egreso. Además, al haberse creado veinte nuevos juzgados afectados al dictado de sentencias, se agilizó muchísimo la tramitación de los juicios laborales en el ámbito de la Capital Federal.

Si a ello sumamos el hecho de que las acciones por responsabilidad civil emergentes de los accidentes de trabajo pasan directamente al fuero civil —además, hace poco hemos aprobado una iniciativa sobre accidentes de trabajo que otorga competencia a la Cámara de la Seguridad Social—, puede suponerse que los juzgados de la Capital verán disminuidos en forma importante la proporción de juicios laborales.

También es cierto que la experiencia en materia de conciliación no ha sido buena en el ámbito de la Capital Federal. Parecería muy difícil que una instancia administrativa obligatoria cambie este panorama, aun cuando existe la conciliación obligatoria en la actual ley 18.345. Asimismo, también es cierto que la audiencia de conciliación se ha ido burocratizando, pero ello tal vez se deba a la errónea ubicación del proceso de conciliación. ¿Cuál es el procedimiento actual? Se inicia la demanda y previo a su contestación se realiza una audiencia de conciliación, colocándose al trabajador en una situación de inferioridad frente al empleador.

Si la audiencia de conciliación se realizara una vez que se contesta la demanda y se abre la causa a prueba, las conciliaciones se alcanzarían en mucha mayor medida. Este procedimiento está contemplado en la modificación que acabamos de introducir al artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, donde se faculta al juez a intentar la conciliación antes de dictar la apertura a prueba de la causa.

La litigiosidad no va a disminuir por el hecho de que imponamos una conciliación administrativa previa. No estamos atacando —como bien se dijo— las causas de la litigiosidad laboral. No estamos perfeccionando los mecanismos de negociación colectiva, de información, de consulta y de acuerdo en las empresas.

La litigiosidad argentina no es causal del costo laboral. El 28 de agosto de 1994 el diario "Clarín" publicó una estadística en la que señala la litigiosidad por cada cien mil habitantes que existe en Estados Unidos, España y Ar-

gentina, que asciende a 14.500, 10.300 y 5.800 casos respectivamente. De modo que no estamos ante índices extraordinarios de litigiosidad. Insisto en que la conciliación obligatoria administrativa —no ya judicial— no nos parece una solución adecuada para disminuir la litigiosidad de las relaciones laborales.

Se dijo que el trabajador siempre concurre a la conciliación en una posición de inferioridad jurídica y técnica. Esto se agrava por algunas disposiciones del proyecto. Así, el artículo 3º expresa que las sumas abonadas como consecuencia de la conciliación estarán exentas de impuestos y de aportes de los trabajadores y de contribuciones de los empleadores con destino al régimen de la seguridad social. El doctor Bermúdez, camarista que nos visitó en la Comisión de Justicia, dijo que lo asombroso del proyecto era que recogía una fórmula inadecuada cuando admitía conciliaciones con imputaciones globales. ¿Qué significa esto? Supongamos que un trabajador reclama diferencias por haberes, aguinaldos, indemnización sustitutiva del preaviso, horas extras y otros conceptos, por mil pesos; se concilia por seiscientos pesos. En este caso el empresario no sólo se ahorra cuatrocientos pesos sino que además está dejando de pagar los aportes y contribuciones que corresponden por los salarios que adeuda al trabajador.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — El señor diputado Sueiro le solicita una interrupción por intermedio de la Presidencia.

Sr. Sueiro. — La concedo, señor presidente.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Sueiro. — Señor presidente: más allá de que entre las modificaciones que vamos a proponer se halla la supresión del artículo al que ha hecho alusión el señor diputado por Catamarca, me pregunto si él conoce la realidad actual en los juzgados laborales. En virtud de la audiencia de conciliación que fija la ley de procedimientos, en los juicios laborales las partes llegan a un acuerdo. Me llama la atención que un camarista se haya asombrado de esto, porque así ocurre en la actualidad: cuando las partes llegan a un acuerdo se adopta una fórmula de conciliación a raíz de la cual no se paga contribución ni tributo alguno. Por lo tanto —reitero— me llama la atención lo que manifestó ese camarista, porque el mecanismo que cito se emplea a diario en todos los juzgados.

El proyecto de ley apuntaba a recoger esa realidad que se verifica en forma permanente

y constante. De todas maneras, como señalara en un principio, vamos a proponer la supresión del artículo en cuestión.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasetti. — Señor presidente: me alegra que se vaya a proponer la supresión de este artículo. Si bien es cierto que hoy las conciliaciones se llevan a cabo en la forma que indica el señor diputado —es decir, con imputaciones globales—, ello no es lo correcto. Quisiera saber qué opina el señor Tacchi en relación con este tema. Estoy seguro de que si mantuviéramos este artículo en la ley, más de un empleador dejaría de pagar sus obligaciones para ir luego a la conciliación y así ahorrar unos pesos de aportes y contribuciones. Aunque el mecanismo sea aceptado por la jurisprudencia, sería asombroso que lo consagráramos por ley cuando por todos los medios se está tratando de recaudar y apretar cada vez más a los empleadores y trabajadores.

Por otro lado, existe una cuestión fundamental: el orden público laboral. No se puede conciliar en detrimento de algunos derechos irrenunciables de los trabajadores. El artículo 69 de la ley vigente establece que cuando el derecho del trabajador surge de los hechos reconocidos por el empleador no podrán proponerse a las partes soluciones transaccionales. Frente a un reclamo por diferencia de haberes o sueldos impagos, puede ocurrir que el empleador reconozca que le debe al trabajador, pero le ofrece el 60 por ciento. Evidentemente, con ello estamos consagrando la renuncia expresa del trabajador a sus derechos.

Además el acuerdo tiene que ser homologado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que en la Capital Federal tiene determinada infraestructura y funcionarios capacitados. Pero, ¿en el interior del país también están capacitados para homologar los funcionarios de esa área? Los acuerdos hoy son voluntarios. En la mayoría de las provincias donde existe la conciliación el acuerdo puede ser apelado ante los jueces del Trabajo, pero esto no sucede en este caso.

Si en este caso hay un acuerdo que va para su homologación al Ministerio y éste no lo homologa, el empleador o el trabajador deben agotar la vía administrativa, llegando por recurso jerárquico al propio ministro de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. Recién allí tienen abierta la vía contencioso administrativa. No pueden ir ante juez común para que los reconozca sus derechos.

Desco efectuar una comparación con el instituto de la mediación que el cuerpo acaba de aprobar. Se ha buscado instalar la mediación civil como una forma experimental y alternativa de resolución de conflictos en sede judicial. En esa figura el reclamante se presenta en la mesa de entradas de un tribunal, donde se le sortea el juez que va a entender en la causa y al mismo tiempo el mediador; y los acuerdos a que se arriben en un caso de medianería, de cobro de alquileres o cualquiera de los otros que se han previsto, siempre van a ser revisados por un juez. Sin embargo, para el caso de los trabajadores, donde están en juego sus derechos —algunos de orden público irrenunciable—, se niega la posibilidad de que sea el juez quien homologue: será un simple funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Por otra parte, en la mediación civil se establece que, una vez iniciado el proceso, si después de la primera instancia las partes manifiestan que no están dispuestas a conciliar, directamente queda expedita la vía judicial. Esta excepción no figura en el proceso de conciliación laboral, y deben agotarse los plazos de la conciliación obligatoria para recién poder acceder a la vía judicial. Esto significa que en dos institutos similares se adoptan soluciones diversas.

Por las razones expuestas y por las que manifestaremos en el debate en particular, nos oponemos totalmente a la aprobación del proyecto de ley en consideración. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Di Tulio. — Señor presidente: luego de escuchar a los compañeros de mi bancada y al resto de los miembros de la oposición que han hecho uso de la palabra queda muy poco por decir, pero no sería leal si no me refiriera a lo que aquí se expresó respecto de que la aprobación de esta norma podría ser tomada como una actitud inocente.

La sanción de este proyecto de ley constituirá un acto de hipocresía en contra de los derechos de los trabajadores, y tiene un cómplice que nadie ha mencionado: la Confederación General del Trabajo. Me refiero a esa CGT que no se preocupa por lo que sucede con los cincuenta trabajadores de Interdiarios que están reclamando el pago de sus salarios; esa misma CGT a la que no le interesa la suerte de los choferes de las líneas 21 y 108, que están de huelga; esa misma CGT que no se compadece de los jubilados que están reclamando al PAMI que de una vez por todas pague los 45 millones de dólares que debe a las distintas farmacias y clínicas médicas, para que puedan ser atendidos.

Seguramente pretenderán echar la culpa de estos 45 millones de dólares de deuda a Angeloz o Massaccesi. Estos compañeros de la CGT, estos representantes de los trabajadores, se hacen los desentendidos.

A esto tenemos que sumar los planteos de algunos señores diputados a los que pondero, como el caso del señor diputado Durañona y Vedía, que nos ha dado una clase como si viniera de la universidad o de la escuela de Las Carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús.

Tengo dudas acerca del conciliador que se inventa por este proyecto de ley, porque he efectuado presentaciones ante el Juzgado Criminal N° 2, de la entonces jueza Amelia Berraz de Vidal, contra un ex funcionario ya fallecido —que mientras estuvo al frente de una empresa del Estado ésta era deficitaria y cuando fue presidente de la misma empresa privatizada dio ganancias—, quien nunca fue convocado por la justicia, ni siquiera a declarar como imputado no procesado.

¿Cómo voy a tener confianza si a diario vemos qué es lo que está pasando? En la sesión en que se discutió la ley de accidentes de trabajo ya lo dije y me alegro de que esté presente el señor ministro de Trabajo, porque seguramente tendrá argumentos sofistas para justificar el atropello que permanentemente se le hace a la clase trabajadora argentina.

Dije que podíamos exhibir orgullosamente al pueblo argentino el hecho de que los ejecutivos argentinos ocupaban el número dos en el ranking mundial, pero también manifesté si en algún momento los trabajadores argentinos figuraron con el número uno del ranking como en la época de Perón.

Pero hay una triste realidad: existe un cómplice que se llama CGT. A las pruebas me remito. Argentina orgullosamente exhibe el número dos en el ranking mundial respecto de los empresarios, señores diputados compañeros y el señor ministro de Trabajo, y también el número dos en materia de desocupación en América latina, después de Nicaragua.

Con honestidad digo que debemos ser el número dos, pero no con ese porcentual que se publica, que alcanza al 14 por ciento, porque creo que estamos orillando el 20 por ciento.

No se trata sólo de esto, compañeros diputados. Los profesionales calificados se ofrecen ahora como personal eventual. En la Argentina de Yrigoyen y Perón, en la Argentina en la que la economía era peronizada, esto no sucedía. Con el nuevo instituto que creamos, seguramente algunos de los mediadores serán varios de

esos abogados creadores de la industria del juicio que los compañeros del oficialismo denunciaron. No tengo dudas de que van a perjudicar al trabajador e irán a la conciliación no por abajo, sino por arriba de la mesa, porque están protegidos por este gobierno, por este ministro inhumano, el más inhumano que existe en la Tierra, que tiene actitudes hitleristas con el pueblo argentino por las manifestaciones que permanente efectúa.

¿Quién se iba a imaginar que en un gobierno que dice ser el de Perón se iba a permitir la concreción de las privatizaciones que hemos sufrido y que iba a ocurrir lo que está sucediendo con la justicia laboral que honraron y dignificaron Perón y Evita.

En un país donde hemos entregado el proyecto Cóndor, la educación, los recursos energéticos renovables y no renovables, el transporte, las comunicaciones y los elementos indispensables para un Estado soberano, hoy claudicamos nuevamente, con la complicidad de la CGT, entregando a los trabajadores maniatados.

Agradezco a mi compañero de bloque, el señor diputado Terragno, quien me facilitó la publicación titulada "El Mercado Interactivo" —les aconsejo que la lean— donde se expresa que quienes se quedaron con las empresas que fueron privatizadas ganaron 9.000 millones de dólares.

¿Por qué no sancionamos una ley que debería ser designado con un término que suele utilizar el señor ministro de Economía, pero cuyo significado no conoce? Estoy hablando de la palabra solidaridad; seamos solidarios y sancionemos una ley a fin de que las empresas que se enriquecieron con estos 9.000 millones de dólares bajo el amparo de este gobierno aporten aunque sea el 5 por ciento de esa cifra, mediante no sé qué impuesto, para crear nuevos puestos de trabajo.

Aquí se ha hecho referencia al Estado benefactor. Me siento orgulloso de haber tenido ese Estado que, de no haber sido benefactor, me habría condenado a seguir lustrando en La Banda, Santiago del Estero, y nunca hubiera tenido la posibilidad de que una empresa como YPF me obligara a estudiar. Gracias a ello hoy estoy aquí desempeñando —bien o mal— mi función, gracias a ese Estado benefactor que es permanentemente combatido por el liberalismo económico. Por suerte hubo hombres firmes como Illia y Perón que no permitieron que nos avasallaran y defendieron los intereses del pueblo.

No se puede decir que el sistema que se propone es mejor que el actual cuando sabemos que no es cierto. ¿Acaso nos olvidamos de que el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social junto con el señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos prometieron en este recinto que habría soluciones para la Argentina? ¿Dónde están?

Los abanderados del liberalismo económico que tanto critican al Estado benefactor seguramente estarán muy contentos con las privatizaciones que se han hecho. Yo no lo estoy porque sus consecuencias se reflejan en la realidad de nuestro pueblo y hacen que los trabajadores no puedan llevar a sus hogares ni siquiera los elementos mínimos e indispensables para vivir.

No me voy a cansar de enumerar determinados derechos, por ejemplo, el derecho a trabajar, a una retribución justa, a la capacitación de la que el señor ministro habló y que hasta ahora no se ha hecho realidad, a condiciones dignas de trabajo, a la preservación de la salud, al bienestar de los jubilados, a la seguridad social, a la protección del trabajador y su familia y al mejoramiento económico. Estos son los derechos que instaló Perón en la Argentina y que muchos radicales acompañaron para que se cristalizaran en conquistas laborales. Por estos derechos luchó la CGT, la misma que ahora claudica y se hace la desentendida, actitud que no me cansaré de denunciar, a pesar de que muchos compañeros la califiquen de valiente. En algún momento pensé que estaba equivocado cuando un compañero de muy buena fe me dijo que para producir cambios había que tener valentía. Pero ahora, a punto de finalizar mi mandato, veo que ni siquiera aquí van a quedar valientes, porque hay una imposición del Fondo Monetario Internacional —la misma que antes combatían— hacia todos los países latinoamericanos, ¿o creen que es casualidad que haya funcionarios extranjeros que pretenden insertarse en el campo popular, tal como lo ha hecho el embajador Check en el cuadro de mis amores? Esa actitud responde a instiuciones precisas. Por ello no podemos seguir con iniciativas de buena fe, ya que quien habla considera que no alcanza con tener iniciativas de buena fe. Además hay una organización como la CGT que ha claudicado y que permanentemente se manifiesta a favor de este gobierno. A esa CGT no le he escuchado decir cosas fuertes en defensa del trabajador, del agro y de la industria. No tenemos rumbo y ésta es la realidad de lo que hoy nos pasa.

Quiero decir a todos los compañeros lo que pienso cuando se habla de los países del Primer

Mundo. Me gustaría que lo más rápido posible sancionemos un proyecto de ley que contemple lo que ocurre en Japón, donde los trabajadores cobran menos cuando el empresario pierde, pero cuando éste gana, los trabajadores perciben un sueldo mayor.

No usemos como ejemplo la internacionalización de la economía, porque en otro momento cuando se internacionalizó la guerra, los argentinos no procedimos de la misma forma, ya que siempre vivimos en paz y acogimos a todos los hombres de buena fe que querían venir a instalarse en nuestro suelo.

Existen argumentos para justificar el atropello que se hace al trabajador. Además, quisiera ver en qué orden quedan los trabajadores para cobrar cuando mañana se trate el proyecto de ley de quiebras. Si quedan en primer orden, voy a pedir las disculpas del caso en el seno de este recinto. Pero acuérdense de lo que digo: van a quedar primero los bancos, la DGI y cualquier otra organización. Por último, va a estar el trabajador. Esa va a ser la realidad.

Con la autorización de la Cámara voy a leer una carta que recibí ayer —fechada el 26 de junio, día en el que se descubrió el petróleo en la zona norte de la provincia de Santa Cruz, de Caleta Olivia. Dice así: "Señor Héctor Di Tulio, diputado nacional, avenida Rivadavia 1849, su despacho. De nuestra mayor consideración: los abajos firmantes, secretarios generales de los sindicatos de Camioneros, Comercio, Petroleros Privados, UTA, UOCRA, SOEMCO y SMATA, todos de la zona norte de la provincia de Santa Cruz y con sede en esta localidad, nos dirigimos a usted y por su intermedio a quien corresponda, al solo efecto de plantearle la situación por la que nos encontramos las organizaciones sindicales ante la total inacción a los reclamos planteados en la Subsecretaría de Trabajo.

"Nuestras denuncias transmiten la gran variedad de violaciones a las leyes laborales de parte de las empresas, que actúan con total impunidad ante la pasividad del organismo competente. Todo esto agravado por el alto índice de desocupación que existe en la zona cuando hay empresas que obligan a sus trabajadores a realizar regímenes de trabajo que rayan con la esclavitud..." —algo que yo había denunciado, poniendo como ejemplo el caso de mi hijo político— "...debiendo trabajar 26 días corridos con 4 días de franco, con disponibilidad las 24 horas. Otro caso sin solución aparente por falta de respuesta de la Subsecretaría de Trabajo es el de despido de personal sin el pago de su corres-

pondiente indemnización que somete al trabajador además de quedar sin trabajo a encontrarse imposibilitado de otorgar a su grupo familiar algo tan elemental como es el pan de cada día hasta que el compañero pueda reinsertarse laboralmente.

"Como verá usted esta situación deja de ser un problema gremial para transformarse en social, en virtud que los afectados deben deambular en los despachos de las autoridades municipales o entidades de bien social a fin de conseguir ayuda alimentaria para paliar la afligente situación que los aqueja.

"Sin otro particular y comunicándole que nos encontramos a su entera disposición a efecto de informarle en detalle de la grave situación que nos ocupa y que en definitiva son los trabajadores, lo saludamos muy atentamente."

De los siete compañeros que firman la nota, ninguno me debe haber votado, pero mientras esté en esta banca voy a defender los derechos de todos, ya que cuando salga de aquí volveré al llano y seguirá peleando por las reivindicaciones que muchos levantaron a lo largo de la historia. Estos compañeros, "secretarios generales"... supongo que están adheridos a la CGT. ¿Dónde está la CGT? Seguramente recibiendo instrucciones de Cavallo.

No hacen falta más argumentos para decir por qué el bloque de la Unión Cívica Radical se opone a esto con la convicción de que es una claudicación al derecho de los trabajadores, como todas las leyes que venimos sancionando con la complicidad de la CGT.

No quiero terminar sin leer palabras de un hombre que defendió a los trabajadores, de un radical yrigoyenista que por circunstancias de la vida después se fue con Perón; seguramente es conocido por todos ustedes. Me refiero a un integrante de FORJA, Homero Manzi, quien para justificar por qué en la Argentina aceptábamos todo lo que venía de afuera, decía: "Alguna vez, alguien que sea dueño de las fuerzas geniales tendrá que realizar el ensayo de la influencia de lo popular en el destino de nuestra América, para recién entonces poder tener nosotros la noción admirativa de lo que somos.

"Esta pobre América que tenía su cultura y que estaba realizando tal vez en dorado fracaso su propia historia, y a la que de pronto iluminados admirantes, reyes ecuménicos, sabios cardenales, duros guerreros y empecinados catequistas ordenaron: ¡Cambia tu piel! ¡Viste esa ropa! ¡Ama a este Dios! ¡Danza esta música! ¡Vive esta historia!

"Nuestra pobre América que comenzó a correr en una pista desconocida, detrás de metas ajenas y cargando quince siglos de desventajas.

"...¿Para qué nuestra música? ¿Para qué nuestros dioses? ¿Para qué nuestras telas? ¿Para qué nuestra ciencia? ¿Para qué nuestro vino? Todo lo que cruzaba el mar era mejor, y cuando no teníamos salvación apareció lo popular para salvarnos. Apareció Yrigoyen y apareció Perón; apareció lo popular, apareció la salvación; instituto de pueblo, creación del pueblo, tenacidad de pueblo. No se comparó lo bueno y lo malo. Lo malo era lo nuestro, pero preferieron lo nuestro." Por eso decía Homero Manzi: "Como hombre argentino me he impuesto la tarea de amar todo lo que nace de nuestro pueblo, todo lo que llega de nuestro pueblo y todo lo que escucha nuestro pueblo." Este hombre era radical yrigoyenista y peronista. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Caray. — Señor presidente: al igual que lo expresado durante la consideración en general de la mediación, debo señalar aquí que me regocija el hecho de que se haya procurado una modalidad para disminuir los conflictos y para lograr la mayor celeridad en todas las controversias laborales.

De lo que me lamento es de que se haya elegido esta metodología que considero absolutamente errada, impropia e inadecuada para lograr esos fines. Es indudable que el tema de los conflictos laborales, particularmente en la Capital Federal, ha provocado una verdadera crisis judicial, a tal punto que los expedientes, antes de ingresar a un juzgado del trabajo, permanecían muchísimo tiempo en la secretaría hasta que se determinara o se sorteara a qué juzgado habrían de corresponder.

Desde hace tiempo, hemos señalado en la Comisión de Justicia la necesidad de la creación de mayor cantidad de juzgados laborales, o mejor dicho, de juzgados a secas, como la única solución al tema de la morosidad judicial, ya que no se puede requerir que un juez dicte una gran cantidad de sentencias, pues atentamos contra la excelencia de la Justicia, llegando a la injusticia o de lo contrario, buscando la excelencia, demoramos tanto que cuando el conflicto está resuelto hemos cometido una nueva injusticia.

No quiero abundar en esta ocasión con expresiones que tuve durante la consideración de la mediación. Simplemente quiero destacar que con este mecanismo que se implementa en la Capital o mejor dicho, en los juzgados naciona-

les, no sólo no se logrará mayor celeridad ni la disminución de las causas que van a terminar en la controversia judicial sino que vamos a incrementar notablemente el tiempo procesal y que al igual que han fracasado o fracasan cotidianamente las audiencias de conciliación en el ámbito judicial, también estarán condenadas a fracasar, cuando menos en la misma proporción, ante un organismo administrativo.

Quiero señalar que en la Comisión de Justicia escuchamos que el número de causas laborales llega aproximadamente a 50 mil al año en la Capital Federal. Si esa cantidad se divide por los días hábiles del año, son algo más de 200 causas diarias.

La norma no contempla el tema de la infraestructura necesaria para responder a esa exigencia, ya sea en el sorteo o en la designación de los conciliadores y tampoco en lo que respecta a la estructura de atención de los conciliadores, reitero, para tan alto número de causas laborales.

Para colmo se establece que la homologación de los acuerdos la llevará a cabo el Ministerio de Trabajo, que en definitiva será una especie de alzada, porque su actuación no consistirá en cumplir con la mecánica ecuación de homologar sino que tendrá que analizar lo que dice esta misma ley sobre la existencia de la justa composición. Como se sabe las normas laborales de fondo y también las procesales son tuitivas. Entonces no se puede legislar un acuerdo en el que la parte tutelada precisamente por la ley resulta perjudicada. Por lo tanto el Ministerio de Trabajo tendrá que leer la causa como si fuera una cámara, es decir, la alzada y luego aprobarla. Allí se va a formar un embudo. Si esta conciliación tuviera gran éxito y se lograra conciliar el 50 por ciento de las causas, el Ministerio de Trabajo tendría que estar homologando 100 causas por día.

El procedimiento está muy poco reglado como también lo están otros elementos e instituciones que se dejaron librados a los ministerios y a la autoridad administrativa.

Para dar un breve pantallazo de esta iniciativa voy a formular algunas críticas. Por ejemplo, se establece la obligatoriedad de la calidad de abogado para ser conciliador; además se establece que se requerirán condiciones especiales según el monto y la complejidad del tema. Esto nos está dando la pauta —no me cabe duda alguna— de que por lo menos va a haber un doble circuito o una doble calidad de conciliadores: los que concilian en casos poco complejos y de montos pequeños, y aquellos que actúan en causas complejas y de montos importantes. De lo

contrario, este artículo 6º no aclararía que se requieren condiciones especiales de acuerdo a monto y a la complejidad del asunto. Tal como lo establece esta norma se está dando lugar a una suerte de justicia de paz, lega, una justicia de paz letrada y una justicia de menor cuantía o justicia vecinal en relación con la justicia ordinaria.

Como esto no está especificado en la norma pareciera que ello quedará librado a la facultad o arbitrio de la autoridad administrativa que seguramente será el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Si bien se determina que se van a exigir calidades especiales según la complejidad del asunto y el monto, esto supone que una autoridad va a designar a un abogado con tales calidades para entender en este tipo de causas y a otro abogado para entender en este otro tipo de causas. El artículo 8º se refiere a cómo se designa el conciliador y en este sentido habla de un simple sorteo. Con un procedimiento de este tipo no se pueden discriminar las calidades jurídicas del abogado que habrá de ejercer de conciliador. No estoy de acuerdo con que sea necesario establecer esa diferencia de calidades; tal vez sería conveniente hacerlo teniendo en cuenta una determinada antigüedad en el ejercicio de la profesión, como ocurre con los jueces, los camaristas y los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto sería más que suficiente y se ahorraría este bache de la norma que es lamentable. Se está sometiendo al justificable a la bondad o defectos que tenga esa autoridad administrativa; se le está quitando la garantía que implica esta norma, como órgano plural, y que brinda la posibilidad de discutir, tomar el tiempo legislativo necesario y contar con una Cámara de origen y una revisora —lo que permite el mecanismo de ida y vuelta de la iniciativa— e inclusive con la posibilidad del veto. Sin embargo, aquí se deja librado al justificable a pautas sumamente importantes que simplemente serán determinadas por la autoridad administrativa.

Hay algo más grave en relación con este mismo tema. El artículo 12 también se refiere a aspectos en los que se vincula al Ministerio de Justicia con la fijación de los honorarios del conciliador. Inclusive se señala que el honorario será distinto y se incrementará de acuerdo con el grado de éxito que haya tenido la conciliación obligatoria. De esta forma se deja en manos del Ministerio de Justicia prácticamente la sanción de una ley de aranceles.

Esto puede significar un perjuicio o un detrimento, pero de lo que no tengo ninguna duda es de que estamos operando una regresión en la evolución operada en el derecho, que ha superado lo que dio en llamarse *resguardo homini*, en el que el ciudadano dependía de la voluntad de un hombre. Esa es una etapa superada; hoy hemos llegado al estado de derecho, en el que tanto la autoridad como el ciudadano dependen de la ley y ambos deben acatarla.

Ahora resulta que esta Cámara resigna sus facultades esenciales y las delega no ya en el Poder Ejecutivo nacional sino en un organismo inferior, como es en este caso el Ministerio de Justicia o, en el otro, el Ministerio de Trabajo.

Esta situación se repite en el artículo 60 cuando se deja librado al arbitrio de los ministerios de Justicia y de Trabajo cuándo comenzará la vigencia de la ley. De esta manera se innova en las leyes de fondo: se modifica el Código Civil, que fija una pauta general.

Está bien que por medio de una ley se establezca cuándo comenzará a regir un nuevo código; que se fijen los días o los años, contados desde la fecha de publicación, a partir de los cuales entrará en vigencia. Puede haber interés en que el ciudadano o el justiciable se informen adecuadamente o en que los conciliadores o los jueces conozcan perfectamente las disposiciones del nuevo código. De todas maneras siempre se fija la fecha de vigencia en la misma norma.

Sin embargo en esta ocasión no es así. Es increíble lo que dice el artículo 60: "...entrará en vigencia cuando lo dispongan los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Justicia."

Además de permitir una muy odiosa delegación de facultades del Poder Legislativo, aquí se consagra una suerte de autoritarismo haciendo depender nada menos que la vigencia de una ley del Congreso de la voluntad omnimoda de dos señores ministros de la Nación. No conozco precedente semejante en cuanto a la entrada en vigencia de una ley.

Toda la normativa se encuentra supeditada a esta suerte de delegación en las autoridades administrativas, lo que le quita el resguardo que el derecho ha logrado precisamente para el ciudadano, haciendo que dependa de una norma preexistente y conocida y nunca de la buena o mala fe o de la buena o mala disposición que pueda tener un funcionario administrativo que por ser tal tiene, dentro del marco de su función, la característica de una relativa discrecionalidad y no del mecanismo de legalidad al que están sometidos los magistrados jurisdiccionales.

Por ello es una pena que se sancione una norma conciliatoria de esta naturaleza, en la que buena parte de lo que debe reglarse quedará sometido a la disposición de la autoridad administrativa con grave detrimento de los justiciables, que no tendrán la garantía de la ley en sentido formal, la que pasa por el Parlamento y lleva en su contenido la opinión dispar y plural de las distintas vertientes políticas que lo integran.

Finalmente quiero destacar que hablo en nombre de los bloques del Partido Liberal y del Partido Demócrata de Mendoza. En tal carácter adelanto nuestro voto por la negativa, tanto en general como en particular. Ojalá que, si esta norma se sanciona, se puedan modificar algunos aspectos sustanciales, a fin de dar garantía al ciudadano y evitar una discrecionalidad administrativa que pueda convertirse fácilmente en arbitrariedad.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Sueiro. — Señor presidente: voy a tratar de ser breve. Quiero regresar al análisis del proyecto, pero antes efectuaré una introducción.

He escuchado una serie de discursos políticos que, con la excusa de esta iniciativa, realizaron una evaluación crítica de nuestro gobierno. No voy a contestar estos argumentos porque hace sesenta días los respondió el pueblo argentino con el 50 por ciento de los votos. Me parece una falta de respeto contestarlos; ya que la voz popular ha sido clara, determinante y concisa en lo que atañe a nuestro gobierno y su rumbo. De ese 50 por ciento de votantes, la mayoría estaba integrada por la clase humilde y en particular los trabajadores.

Voy a aclarar concretamente algunas cuestiones vinculadas con este proyecto de ley. Realmente me llamaron la atención los análisis que se hicieron en este recinto, porque cuando hace pocos minutos votamos un sistema similar para todos los ciudadanos, basado en el mecanismo de la mediación, escuché de la oposición que dicho mecanismo era novedoso, hermoso y necesario. Sin embargo, cuando se trata de aplicar una mecanismo similar a los trabajadores, resulta que pasa de ser hermoso a contraproducente.

Más que argumentos se está expresando una catarata de excusas, por lo que, más que dar una contestación racional, tendríamos que llamar a un psicólogo para que nos explique una contradicción tan obvia. Se han presentado es-

tadísticas que no brindan ningún aporte. Además, nadie dijo cuánto dura un proceso laboral.

Sr. López (A.H.). — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Sueiro. — No, señor diputado; quisiera terminar de redondear mis conceptos. Hemos escuchado estadísticas sobre una determinada cantidad de pleitos, pero nadie dijo cuánto dura un juicio laboral en la situación en que nos encontramos. Voy a contestar a esa incógnita: se extiende aproximadamente entre cuatro y seis años.

Frente a la contingencia de un despido, un reclamo salarial o una cuestión alimentaria como la que se citó hace algún momento, el trabajador va a cobrar, pleito mediante, dentro de cuatro o seis años. Lo que nosotros planteamos a través del mecanismo que proponemos es la posibilidad de que, sobre la base de un esquema de conciliación, ese tipo de situaciones pueda resolverse de una forma más rápida.

De acuerdo con la ley vigente existe una audiencia de conciliación dentro del mecanismo del pleito judicial. ¿Saben cuánto tiempo transcurre entre el inicio de un juicio laboral y la primera audiencia de conciliación? En el mejor de los casos, entre cinco y seis meses. ¿Saben quién toma esa primera audiencia de conciliación en el pleito judicial? No el juez ni el secretario del juzgado, sino un empleado. Ello, no porque los jueces sean vagos o porque los secretarios no quieran hacerlo, sino porque están atestados de trabajo. Es así que la audiencia de conciliación termina tomándola un empleado del juzgado, quien a raíz de su falta de conocimiento o de capacidad, por más esfuerzos que haga generalmente no encuentra una solución en esa audiencia.

Esta es la realidad; esto es lo que hoy pasa en los juicios laborales. Me refiero no a lo que podría o debería ocurrir sino a lo que actualmente sucede en la justicia laboral.

Nosotros planteamos sencillamente un mecanismo previo. Si no se llegara a un acuerdo en la etapa de conciliación —que además es muy breve—, directamente se va a la instancia del pleito, con lo cual estamos eliminando una demora muy importante. Mediante la instrumentación del nuevo mecanismo, aquella primera audiencia de conciliación cuya concreción hoy demora entre cuatro y cinco meses, va a desaparecer el proceso laboral.

Finalmente desco referirme a dos cuestiones fundamentales con respecto al procedimiento de la conciliación.

En primer lugar, se trata de una etapa simplemente obligatoria, pero el trabajador no tiene ninguna obligación de conciliar si entiende que la propuesta que le realizan no satisface sus intereses. En este caso tendrá expedita la vía judicial y, como cualquier ciudadano, podrá transitar por el camino de la Justicia. En segundo término, quiero señalar que no es verdad que en esta etapa de conciliación el trabajador va a estar solo. El proyecto de ley en tratamiento, que quizá no ha sido debidamente leído, determina de manera expresa que el trabajador deberá estar asistido en la etapa de conciliación por un abogado o por la organización sindical que lo representa; de forma tal que el equilibrio entre las partes está debidamente preservado para que el trabajador pueda llegar a un acuerdo conciliatorio o prosiga con la etapa judicial.

Repito lo que dije anteriormente: con este mecanismo no se impide la acción de la Justicia. Vamos a abreviar significativamente la etapa judicial porque, si fracasa la conciliación, directamente se va a juicio. Resulta una grave contradicción que algo que es bueno para un sector de la sociedad —me refiero a la mediación— no lo sea para el de los trabajadores.

En cuanto al resultado de la conciliación, deseo señalar que el acuerdo al que arriben las partes, que será homologado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, está condicionado a su justa composición. La homologación debe estar fundada y explicitada, y el interés del trabajador debe hallarse resguardado.

Me llama la atención que se sostenga que no corresponde que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social homologue, porque ese ministerio hoy homologa acuerdos de este tipo y además los convenios colectivos de trabajo, en los que se trata desde los salarios de un sector hasta las condiciones de trabajo y un sinnúmero de normas que regulan la actividad laboral, lo que sin lugar a dudas implica una decisión trascendente. En consecuencia, si el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social puede homologar un convenio colectivo de trabajo, no entiendo cómo se puede cuestionar con seriedad que homologue un acuerdo entre un trabajador y un empleador.

Sr. Garay. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Sueiro. — No, señor diputado.

Es evidente que este nuevo mecanismo que se propicia implementar no va a resolver la cuestión de los pleitos laborales, pero entendemos que va a ser un instrumento que ayudará y facilitará la etapa de conciliación. Además, por sobre todas las cosas hay que tener en cuenta la situación del trabajador cuando reclama salarios o ante un despido, porque en esos casos muchas veces la solución rápida es mejor que la solución fantasiosa dentro de cinco años. Esa es la realidad.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — La Presidencia informa que se ha agotado la lista de oradores. No habiendo número en el recinto, se va a llamar para votar.

—Se llama para votar.

—Mientras se llama para votar:

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Señor presidente: sólo quería saber si la Presidencia tiene conocimiento del número de diputados que están en la casa.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — De acuerdo con lo informado por Secretaría, hay 145 señores diputados en la casa.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Alberto Reinaldo Pierri.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: tengo información de que varios señores diputados se están acercando al recinto, por lo cual considero que vamos a poder continuar sesionando.

Sr. Gauna. — ¡Pero cada vez somos menos en vez de ser más!

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: en caso de que no haya quórum debería pasarse lista y que ese total sea tomado como el número de diputados presentes en esta sesión, porque al comienzo había 157 diputados en el recinto.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia desea saber si los bloques pueden asegurar que hay diputados que se van a hacer presentes en el recinto.

Sr. Matzkin. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Pierri). — ¿El bloque radical puede asegurar lo mismo?

Sr. Pascual. — No, señor presidente.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia advierte que en este momento hay 118 señores diputados presentes en el recinto. Si se hicieran presentes doce señores diputados más podríamos continuar sesionando.

Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: lamentablemente tenemos dificultades para continuar sesionando. ¿Qué opinión le merece a la Presidencia que haya 142 señores diputados que a fin de mes cobrarán la dieta de igual modo que quienes estamos en el recinto? (*Aplausos y manifestaciones.*) ¿No le parece injusto?

Sr. Presidente (Pierri). — En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 157 del reglamento, la Presidencia invita a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 10.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 23 y 15.

FELICIO F. RAMOS.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

II

APENDICE

A. SANCIONES DE LA HONORABLE CAMARA

1. PROYECTO DE LEY QUE PASA EN REVISION AL HONORABLE SENADO

Buenos Aires, 12 de julio de 1995.

Al señor presidente del Honorable Senado:

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha considerado, en sesión de la fecha, el proyecto de ley venido en revisión por el cual se crea la mediación obligatoria previa a todo juicio, y ha tenido a bien aprobarlo, con el voto de los dos tercios de los señores diputados

presentes (artículo 81 de la Constitución Nacional), de la siguiente forma:

El Senado y Cámara de Diputados, ...

MEDIACION Y CONCILIACION

Disposiciones generales

Artículo 1º.— Institúyese con carácter obligatorio la mediación previa a todo juicio, la que se regirá por